

HACIA LA JUSTICIA CLIMÁTICA Y ECONÓMICA: UN ANÁLISIS FEMINISTA DE LAS TENDENCIAS CRUCIALES

ENERO 2024



RESUMEN EJECUTIVO

Para lograr una visión feminista de justicia económica y climática, hay una clara necesidad de alejarse de los modelos no sostenibles de consumo y de extracción de recursos. Sin embargo, los países más ricos del mundo y quienes tienen los ingresos más altos, siguen cosechando ganancias sustanciosas de los combustibles fósiles. A su vez, se niegan a brindar el correspondiente financiamiento para el desarrollo conforme a sus obligaciones. Sin el mismo, será difícil para los países en desarrollo lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, en función de las tendencias actuales de desigualdad de ingresos, se estima que las mujeres alcanzarán la paridad de género laboral en 2100.

La proporción de países de bajos recursos con alto riesgo de insolvencia financiera para el pago de la **deuda**, o que ya se encuentran en esta situación crítica, ha aumentado considerablemente. En este sentido, los países destinan cada vez más ingresos fiscales al pago de la misma, incluso mucho más de lo que se destina a las áreas de educación y salud, aun considerando la época de pandemia. La respuesta internacional a este problema se centra principalmente en el Marco Común del G20 para los Tratamientos de la Deuda, el cual se estableció en noviembre del 2020. Sin embargo, activistas de la sociedad civil y gobiernos sur condenaron el Marco Común, sosteniendo que no promueve el avance en la cancelación de la deuda, el cual tiene un alcance limitado. También afirman que esto fuerza a los países a formar parte de programas del FMI para poder acceder a tratamientos de la deuda.

El abuso fiscal sigue descontrolado, con miles de millones de dólares anuales que se pierden debido a la evasión de impuestos por parte de corporaciones y del sector millonario de la población. La pérdida de dinero de los países de bajos ingresos suman un monto aproximado de casi la mitad de los presupuestos asignados a la salud pública. Los países mantienen una tendencia, que data de hace décadas, que indica que se encuentran bajo presión para conservar los índices de impuestos corporativos bajos. A su vez, compensan las pérdidas de ingresos fiscales a través de mayores impuestos al consumo, y de esta manera afectan excesivamente a las personas de bajos ingresos, en lugar de impactar sobre las personas con mayor solvencia económica. Por lo general, esto ocurre a raíz de directrices impuestas por instituciones financieras internacionales como el FMI. El Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 sobre Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que entra en vigencia en 2024, no aborda el alcance de este desafío. Sin embargo, hay esperanza de que se logre establecer una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Impuestos que sea más democrática, a raíz de una propuesta recientemente publicada por el Secretario General de la ONU y por una resolución de la Asamblea General de la ONU, presentada por el African Group y que se adoptó a fines de noviembre de 2023.

Recientemente, el **Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial** definieron agendas a fin de llevar a cabo reformas de género, climáticas e internas. Sin embargo, ambas instituciones todavía se niegan rotundamente a reconocer cómo sus déficits democráticos e imposiciones de medidas austeras estrictas dañan directamente a las personas y al planeta. Incluso, durante el período de pandemia, el FMI concedió la mayor parte del contingente de préstamos a expensas de la adopción de medidas austeras, que sólo exacerbaban las consecuencias de la COVID-19 y recayeron en las personas más marginadas. Entonces, es una precondition fundamental cambiar el rol de las BWI para lograr una estructura de gobernanza económica global más feminista para lo que, al menos, se debe comenzar a llevar a cabo una reforma de las cuotas para desarticular el poder de los países más ricos que actualmente dominan el FMI.

Si bien la Organización Mundial del Comercio (OMC) acentúa cada vez más la relación entre género y **comercio**, a la vez que incluye políticas de género en los tratados de libre comercio, los patrones globales y la gobernanza del mercado continúan adoptando un enfoque en silo y neoliberal con respecto a los Derechos Humanos. Hay una cantidad ascendente de tratados comerciales que se negocian por fuera de la OMC y que expanden la jurisdicción de la gobernanza del mercado más allá de asuntos de comercio explícitos, e incluyen asuntos no comerciales. Estas reglas restringen las capacidades de los países del sur global para implementar regulaciones que les permitan hacer lo necesario para lograr la igualdad de género. Mientras tanto, los regímenes comerciales actuales fomentan la explotación capitalista de los combustibles fósiles extractivos, tanto a través del uso de mecanismos de solución de diferencias entre inversor y estado por parte de corporaciones, para de esta forma arbitrar en contra de los países que implementan estándares ambientales, como a través de una nueva era de extractivismo «verde» orientado a la exportación de materias primas críticas, tales como el litio.

La **captura corporativa** de la gobernanza global y del desarrollo es más evidente debido a la tendencia al alza de un «*multistakeholderismo*» (participación de las múltiples partes interesadas), que incluso se fomenta en la ONU. El *multistakeholderismo*, en principio, invita a una cierta cantidad de partes interesadas a participar en la gobernanza global, a expensas de que los gobiernos prácticamente no tengan voz. No obstante, en la práctica, las empresas multinacionales reciben una influencia desmedida en la toma de decisiones, la imposición de estándares y la distribución de los bienes públicos. Esto se evidencia en la adhesión, cada vez mayor, de la ONU a colaboraciones público-privadas para cerrar la «brecha de financiamiento para el desarrollo». También se manifiesta en las propuestas de asociaciones, como el acuerdo, actualmente cancelado, entre ONU Mujeres y BlackRock, siendo esta última la firma de inversión más grande del mundo.

Si bien el **financiamiento climático** ha crecido año a año, los países del norte global no han cumplido con el compromiso asumido en 2009, en la COP15, de brindar y movilizar USD 100 000 millones de financiamiento anual para el 2020. Asimismo, el financiamiento climático se distribuye a través de préstamos, lo cual exacerba la crisis de la deuda; encierra a los países de tal manera, que resultan arrojados a una mayor vulnerabilidad climática; propone un enfoque deficiente para abordar las pérdidas y los daños; no llega a los países que más los necesitan; y no responde a la necesidad de una perspectiva de género.

Este Reporte

Siendo el primero de una próxima serie anual, este informe brinda un panorama de las tendencias recientes, particularmente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en adelante ya que es desde cuando están disponibles datos y estadísticas. Se presenta un análisis desde una perspectiva feminista estructural para identificar los desarrollos positivos y negativos dentro de las siete áreas principales, lo que favorece soluciones que se enfoquen en la agentividad de la gente y las personas en lugar de que prioricen los intereses corporativos y las soluciones tecnológicas. Este informe destaca tanto la ubicación de lucha local con respecto a las consecuencias del neoliberalismo como las propuestas de activismo de alcance global de la sociedad civil y los países del sur global para transformar nuestro sistema económico.

Puede leer este informe en los siguientes idiomas: árabe, francés, inglés y español y a través de sitio web interactivo economictrends.wedo.org.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1** Lista de abreviaciones
- 2** Introducción
- 3** Transformación de los sistemas para la justicia climática, económica y feminista
- 8** Deuda
- 13** Tributación
- 18** Gobernanza económica global
- 24** Comercio
- 28** Captura corporativa
- 32** Financiamiento climático
- 36** Conclusión

RECONOCIMIENTOS

Este informe lo escribió [Shared Planet](#), con el liderazgo de Arimbi Wahono y la contribución de Joanna Grylli.

El proceso de preparación tuvo el beneficio de incluir la revisión y el aporte de una gran cantidad de intelectuales feministas, lo cual refleja el espíritu colectivo del proyecto y del análisis que se desprende del mismo. Entre ellas están: Âurea Mouzinho, Bhumika Muchhala, Carola Mejía, Diyana Yahaya, Emilia Reyes, Friederike Strub, Imali Ngusale, Polina Girshova, y Sanam Amin.

La coordinación del informe estuvo a cargo de Katie Tobin de Women's Environment and Development Organization (WEDO), con aportes de Tara Daniel, Lindsay Bigda, y Bridget Burns.

Este informe fue traducido al español por Agostina Montaña Lopez.

Diseñado por [Brevity & Wit.](#)

LISTA DE ABREVIACIONES

AfCFTA	Área Continental Africana de Libre Comercio
BEPS	Erosión de la base imponible y desvío de utilidades
BWIS	Instituciones Bretton Woods
TIPAT	Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo
ISSD	Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda
FpD	Financiamiento para el Desarrollo
PBI	Producto bruto interno
INB	Ingreso nacional bruto
CIIT	Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
AII	Acuerdo internacional de inversión
ICMA	Asociación Internacional de Mercados de Capitales
CFI	Corporación Financiera Internacional
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ICRICT	Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional
ADIE	Arbitraje y conciliación de diferencias entre inversionistas y Estados
FMI	Fondo Monetario Internacional
IPEP	Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad
DPI	Derechos de propiedad intelectual
PMA	Países menos adelantados
EMN	Empresa multinacional
MdE	Memorándum de entendimiento
NCQG	Nueva meta colectiva cuantificada
AOD	Ayuda oficial para el desarrollo
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
APP	Asociación Público-Privada
FFRS	Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
DEG	Derechos especiales de giro
PEID	Pequeños estados insulares en desarrollo
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
ONUDD/ UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
IVA	Impuesto al valor agregado
OMS	Organización Mundial de la Salud
OMC	Organización Mundial del Comercio

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI se ha caracterizado por una serie de crisis solapadas: la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, los niveles desorbitantes de deuda, las tasas de inflación en aumento y la desigualdad y pobreza cada vez más profundas. Todas estas problemáticas acarrearán consecuencias graves para los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas de género diverso. La pandemia del COVID-19 develó y magnificó la naturaleza extractiva y de desigualdad de la economía global y sus repercusiones. Al mismo tiempo, también hizo evidente que los gobiernos son más que capaces de encauzar los recursos públicos para responder ante una emergencia. Frente a la «policrisis» actual,¹ los movimientos feministas y de los pueblos están desafiando la persecución desenfundada por el crecimiento económico y de las ganancias, y luchando por una visión radical de justicia ambiental y económica.

Dicha policrisis surge del paradigma económico dominante del neoliberalismo, el cual ha fomentado las dinámicas de desigualdad de la economía global desde la década de 1980. El neoliberalismo, caracterizado por la desregulación, la privatización y la falta de presencia del Estado en áreas sociales, ha exacerbado las desigualdades, concentrado la riqueza en manos de unos pocos, e impuesto regímenes de deuda, de tributación y de mercado insostenibles en la mayoría de las naciones. Estas prácticas perpetúan un legado de injusticias coloniales a través de las que los países del norte global extraen recursos, mano de obra e ingresos tributarios de los países del sur global. Es más el dinero que estos últimos pierden a través del servicio de las deudas, de los flujos financieros ilícitos y de la evasión de impuestos, que el que reciben en asistencia o financiamiento climático.

El neoliberalismo y sus manifestaciones, que se observan en la austeridad, en la deuda y en el régimen de mercado desigual, hace que las mujeres y las personas de género diverso enfrenten consecuencias desproporcionadas. Debido a los roles tradicionales que ocupan en la sociedad, a la preponderancia de tener empleo informal, a sus exiguas ganancias, a su acceso limitado a los recursos, tales como tierras y seguridad social, y a la participación en la agricultura de subsistencia, las mujeres son más propensas a sufrir empobrecimiento.² A lo largo y ancho de todas las regiones, las mujeres dedican mucho más tiempo en trabajos de cuidado no remunerados que los hombres. Esta situación no solo cohibe a las mujeres de obtener posiciones mejores pagas o, peor aún, les coarta la posibilidad de participar en el mercado laboral desde un principio, sino que también las privan de su derecho al ocio, a las oportunidades de educación o a otros caminos.³ Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerados, conforman entre el 10% y el 39% del producto bruto interno (PBI) en algunos países.⁴ A pesar de esto, el trabajo de cuidado sigue sin ser reconocido, sin dejar de ser subestimado, y sin dejar de ser mal remunerado o incluso no remunerado. Asimismo, en vista de los recortes de las prestaciones públicas, este trabajo aumenta a gran escala.⁵

ESTE INFORME

El Nexo de Acción Feminista para la Justicia Económica y Climática coordina el activismo colectivo y la difusión de conocimientos, buscando promover la transformación necesaria que implica alejarse del capitalismo de los combustibles fósiles, del neoliberalismo, del patriarcado y de la supremacía blanca que impulsan la crisis

-
- ¹ La «policrisis» es un término [popularizado](#) por el historiador economista británico Adam Tooze en una columna del Financial Times en 2022 titulada *Bienvenidos al mundo de la Policrisis* para describir como las diversas conmociones interactúan de tal manera que «el todo es incluso más abrumador que la suma de las partes».
 - ² Nexo de Acción Feminista para la Justicia Económica y Climática, [Una agenda feminista para las personas y el planeta: Principios y recomendaciones para una agenda feminista y global de justicia económica](#), 2021.
 - ³ World Inequality Lab, [Half the sky? The Female Labor Income Share in a Global Perspective](#), 2021.
 - ⁴ Organización Internacional del Trabajo, [El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente](#), 2018.
 - ⁵ UN Women, [A toolkit on paid and unpaid care work: From 3Rs to 5Rs](#), 2022.

climática y la desigualdad desmedida. Esta iniciativa tiene como objetivo cambiar de forma urgente y radical nuestro enfoque hacia el crecimiento económico, nuestros sistemas de producción y consumo, y las reglas que gobiernan nuestros sistemas macroeconómicos y multilaterales.⁶

Tal como se ilustra en este informe, hay una brecha significativa entre el orden global contemporáneo y la visión propuesta por el Nexo de Acción Feminista y nuestras organizaciones aliadas. **Para comenzar a determinar qué tan lejos estamos de esta visión, y por lo tanto cómo comenzar para alcanzarla, este informe evalúa el progreso y los desafíos en siete áreas esenciales a través de siete capítulos que corresponden a nuestras demandas claves.** Estas son: 1) transformar los sistemas en favor de la justicia climática, económica y feminista; 2) justicia de la deuda; 3) tributación equitativa y progresista; 4) reformar el rol de las Instituciones Bretton Woods en la gobernanza económica global; 5) mercado con justicia de género; 6) terminar con la captura corporativa; y 7) financiamiento climático y con justicia de género.

Al ser la primera entrega de una próxima serie anual, este informe brinda un panorama de las tendencias recientes. Se centrará el margen temporal que aborda desde el 2020, durante el inicio de la pandemia del COVID-19, en adelante, debido a que desde dicho momento se encuentran disponibles estadísticas y otros datos. El análisis emplea una perspectiva feminista estructural para identificar desarrollos positivos y negativos en cada una de las siete áreas principales previamente mencionadas, y favorece soluciones que enfatizan la capacidad de agencia de las personas y las comunidades por encima de los intereses corporativos y las soluciones tecnológicas. Este informe destaca tanto las ubicaciones de lucha locales en contra de las consecuencias del neoliberalismo, como las propuestas globales de incidencia de la sociedad civil y los países del sur global para transformar nuestro sistema económico.

I. TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA, ECONÓMICA Y FEMINISTA

El crecimiento económico global ha sido promovido por un modelo de consumo y extracción de recursos en alza, con efectos catastróficos sobre el clima. A pesar de que hubo una pequeña disminución de emisiones en el 2020 durante el comienzo de la pandemia, esta tendencia se revirtió drásticamente en el 2021. **De las 50 000 millones de toneladas de emisiones de carbono que se lanzaron a la atmósfera en el 2021, tres cuartos fueron producidos por la quema de combustibles fósiles con fines energéticos.**⁷ Mientras que las emisiones globales todavía se encuentran muy por encima de lo que se requiere para respetar el umbral de temperatura de 1.5 °C, conforme al Acuerdo de París, y, al mismo tiempo, las personas enfrentan una crisis de costo de vida a raíz de los valores cada vez más altos de la energía, las empresas energéticas están cosechando sumas exorbitantes en ganancias. **Un total de 45 empresas de energía ganaron un promedio de USD 237 000 millones anuales en beneficios extraordinarios en 2021 y 2022, lo que significa un 10% más con respecto a las ganancias promedio de los cuatro años anteriores.**⁸

⁶ El marco conceptual para el Nexo de Acción sienta sus bases en tres recursos publicados en 2021:

- Una propuesta para la Justicia Económica Feminista, cuya autora es Diyana Yahaya [[INGLÉS](#), [FRANCÉS](#), [ESPAÑOL](#)]
- Un informe sobre Un Green New Deal global, feminista y descolonizado, cuya autora es Bhumika Muchhala [[INGLÉS](#), [FRANCÉS](#), [ESPAÑOL](#)]
- Un informe sobre los Derechos Humanos y el Sector Privado, cuya autora es Sanam Amin [[INGLÉS](#), [FRANCÉS](#), [ESPAÑOL](#)]

Las traducciones al árabe de los tres documentos estarán disponibles a fines de febrero 2024.

⁷ World Inequality Lab, [World Inequality Report 2022](#), 2021.

⁸ ActionAid & Oxfam, [Big business' windfall profits rocket to "obscene" US\\$1 trillion a year amid cost-of-living crisis; Oxfam and ActionAid renew call for windfall taxes](#), 2023.

Al mismo tiempo, debido al estímulo del afianzamiento del modelo económico neoliberal de la década de 1980, las desigualdades en los ingresos han estado al alza prácticamente en todos los países,⁹ con subidas acentuadas desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, tanto dentro como entre los países.¹⁰ **Actualmente, el 10% de la población más rica del mundo captura el 50% de los ingresos globales, mientras que el 50% inferior de la población adulta global comparte solo el 8,5% de los ingresos globales.** De hecho, en el 2020 se registró el aumento más significativo de riqueza en la población multimillonaria. **Durante la pandemia, la población multimillonaria sumó a su riqueza neta USD 1,9 billones en el 2020 y USD 1,6 billones en el 2021.**¹¹ Las desigualdades en los ingresos suelen impactar con más austeridad en las mujeres y en las personas de género diverso que en los hombres: **si las tendencias actuales se mantienen, las mujeres alcanzarán la paridad de género en los ingresos laborales para el 2100.**

EL 1% DE LA POBLACIÓN CAPTA EL 20% TOTAL DE LOS INGRESOS GLOBALES (2021)

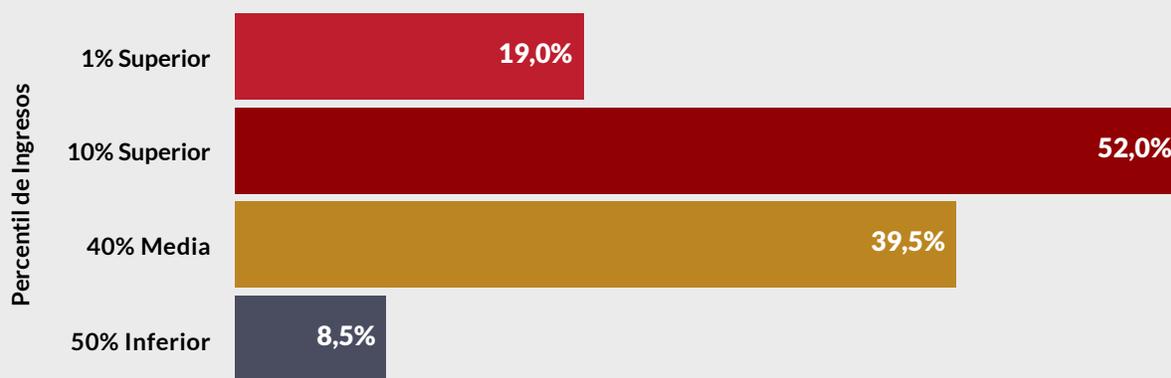


Figura 1.1: Parte del ingreso total global por el percentil de ingreso (World Inequality Lab, 2021).

La desigualdad global se manifiesta directamente en la desigualdad de las emisiones de carbono, ya que las emisiones excesivas por parte de la población más rica del mundo son el resultado de sus patrones de consumo y de inversión. Durante las últimas dos décadas, el 10% de la población más rica del mundo ha sido responsable de más de la mitad de todas las emisiones de carbono, mientras que solo el 1% de la población mundial es responsable por la mitad de todas las emisiones de la aviación. **Se proyecta que para el 2030 las emisiones de consumo per cápita del 1% de la población más rica del mundo será 30 veces mayor que el límite establecido en el Acuerdo de París con respecto al aumento de 1.5 °C.**¹² Los datos del 2019 revelan que la población estadounidense emite tres veces más que el promedio mundial de emisiones per cápita (casi 19 veces más del nivel necesario para mantener el calentamiento por debajo de 1.5 °C), mientras que las población del África Subsahariana emite solo un cuarto del promedio mundial per cápita.¹³

⁹ Aquí se utiliza una ratio de T10/B50 para medir la desigualdad entre un promedio de ingresos del 10% superior y del 50% inferior.

¹⁰ Development Initiatives, [Inequality: Global trends](#), 2023.

¹¹ Development Initiatives, [Inequality: Global trends](#), 2023.

¹² Oxfam & the Institute for European Environmental Policy (IEEP), [Carbon inequality in 2030: Per capita consumption emissions and the 1.5°C goal](#), 2021.

¹³ World Inequality Lab, [World Inequality Report 2022](#), 2021.

NORTEAMÉRICA EMITE TRES VECES MÁS QUE EL PROMEDIO MUNDIAL DE LAS EMISIONES PER CÁPITA (2019)

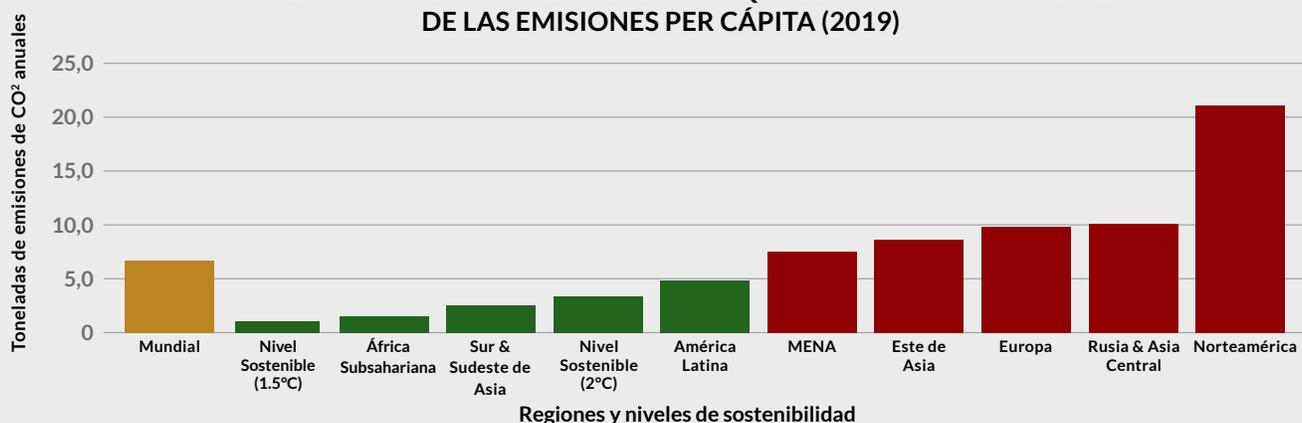


Figura 1.2: Comparación regional de las emisiones promedio per cápita (World Inequality Lab, 2021)

Alternativas para el bienestar humano: decrecimiento y el «Buen Vivir»

En los últimos años, las alternativas al modelo de crecimiento económico infinito han acaparado cada vez más la atención, siendo el concepto de decrecimiento una de las narrativas más fuertes.¹⁴ El decrecimiento desafía la búsqueda convencional del crecimiento económico, aboga por una reducción liderada democráticamente y una redistribución de la producción y el consumo en los países industrializados, para enfocarse en los objetivos económicos del bienestar humano y los límites ecológicos.¹⁵ Las políticas de decrecimiento incluyen reducir sectores destructivos (tales como combustibles fósiles, aviación, y ganadería) y mejorar los servicios públicos para obtener resultados sociales sin necesidad de un alto uso de recursos. A su vez, estas políticas reconocen que ciertos sectores (como el de cuidado) necesitarán crecer para satisfacer necesidades básicas. El enfoque de decrecimiento sostiene que la descarbonización en los países más ricos liberará recursos para los países de bajos y medianos ingresos que todavía necesitan crecimiento para el desarrollo.¹⁶

Desde el sur global también han surgido caminos alternativos para un futuro socio-ambiental. El concepto del «buen vivir» (o *sumak kawsay* en quechua) se origina en Sudamérica, con raíces en la cosmología de los pueblos originarios Quechua de los Andes. Dicho concepto propone vivir bien a través de una relación armoniosa entre las comunidades humanas y el mundo natural. Tanto Ecuador como Bolivia han reconocido el «buen vivir» y los Derechos de la Naturaleza en sus constituciones.¹⁷ Si bien las industrias de los combustibles fósiles han seguido extrayendo recursos de Ecuador durante la última década, hubo victorias significativas: en diciembre de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó a favor de la Reserva de Los Cedros y los Bosque Protegidos en peligro de extinción para protegerlos de la industria del cobre y la minería del oro, lo que sienta un precedente legal para proteger los Derechos de la Naturaleza.¹⁸

¹⁴ Hickel, [Less is More: How degrowth will save the world](#), 2020.

¹⁵ Kothari, Demaria, & Acosta, [Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy](#), 2015.

¹⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), [Declaración sobre el Derecho al Desarrollo](#), 1986; Hickel, [Menos es más: Cómo el decrecimiento salvará al mundo](#), 2020. El Nexo de Acción publicará a principios del 2024 una serie introductoria sobre el *Decrecimiento para la Justicia Social*, escrita por Emilia Reyes.

¹⁷ Kothari, Demaria, & Acosta, [Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy](#), 2015.

¹⁸ University of Sussex, [New 'Rights of Nature' case will have major implications for protected forest and indigenous lands](#), 2022.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), si bien sigue siendo una de las fuentes más importantes de transferencia de los países del norte global a los del sur global, continúa estando muy por debajo de lo prometido o de los niveles requeridos. La AOD constituye más del 60% del financiamiento externo en los países menos adelantados (PMA).¹⁹ A pesar de que el objetivo de la ONU que implica que los países desarrollados brinden el 0,7% de su ingreso nacional bruto (INB) en AOD fue establecido hace 60 años, muy pocos países cumplen con él.²⁰ **En 2022, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD), quienes estaban obligados a brindar AOD, destinaron solo el 0,36% de su INB en AOD. En ese mismo año, solo cinco países cumplieron o superaron el objetivo de la ONU de 0,7% del INB en AOD.**²¹

En 2022, la AOD brindada por los miembros del CAD sumó un total de USD 204 000 millones, un aumento de un 13,6% con respecto al año anterior, considerando la inflación.²² Sin embargo, gran parte de este aumento se puede atribuir al apoyo a refugiados por parte de los países donantes y a la ayuda humanitaria, que significó aproximadamente un 14,4% y un 10,9% respectivamente, del total de los flujos de la AOD. En gran parte, esto se debe a un aumento en AOD para Ucrania como respuesta a la invasión de Rusia.²³ Si se descuentan los costos y los flujos de los refugiados destinados a Ucrania, **la AOD disminuyó un 4% con respecto al 2021,²⁴ y sufrió una reducción total de un 0,7% para los PMA y 7,8% para la región del África Subsahariana.**²⁵

El gasto en AOD también es insignificante en relación a los montos que los países ricos destinan a sectores que contribuyen activamente con el daño que sufre el sur global. **Solo la expedición militar de EE. UU. en 2022 fue cuatro veces mayor a lo acumulado en gasto para la AOD a nivel global ese mismo año.**²⁶ El G20 (las 20 economías más grandes del mundo), en 2022 destinó USD 1,4 billones a subsidios para los combustibles fósiles, monto que fue 7 veces mayor que el gasto destinado para la AOD.²⁷ Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le entregó a los países ricos un monto de USD 437 000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), producto de la más reciente distribución del FMI en 2021. Como resultado, la liquidez de estos países se vio mucho más estimulada en relación con lo que ellos brindaron para la AOD.²⁸

¹⁹ OECD, [External finance to least-developed countries \(LDCs\): A snapshot](#), 2022.

²⁰ OECD on Development, [Official Development Assistance April 2023 Preliminary figures](#), 2023.

²¹ Entre esos países estaba Luxemburgo (1%), Suecia (0,9%), Noruega (0,86%), Alemania (0,83), y Dinamarca (0,7%).

²² OCDE sobre el Desarrollo [Ayuda oficial para el desarrollo Abril 2023 figura preliminares](#), 2023.

²³ Ibidem.

²⁴ Relief Web, [On the Preliminary 2022 ODA Figures: What is the real deal on REAL aid?](#), 2023.

²⁵ OCDE sobre el Desarrollo [Ayuda oficial para el desarrollo Abril 2023 figura preliminares](#), 2023.

²⁶ Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), [SIPRI Military Expenditure Database](#), n.d.

²⁷ Energy Policy Tracker, [Fanning the Flames: G20 provides record financial support for fossil fuels](#), 2023.

²⁸ Eurodad, [The 3 trillion dollar question: What difference will the IMF's new SDRs allocation make to the world's poorest?](#), 2021.

LAS ECONOMÍAS MÁS AVANZADAS DESTINAN MUCHO MÁS EN EXPANSIÓN MILITAR Y EN SUBSIDIOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, Y, AL MISMO TIEMPO, SE ACAPARAN GRAN PARTE DE LOS DGI DEL FMI

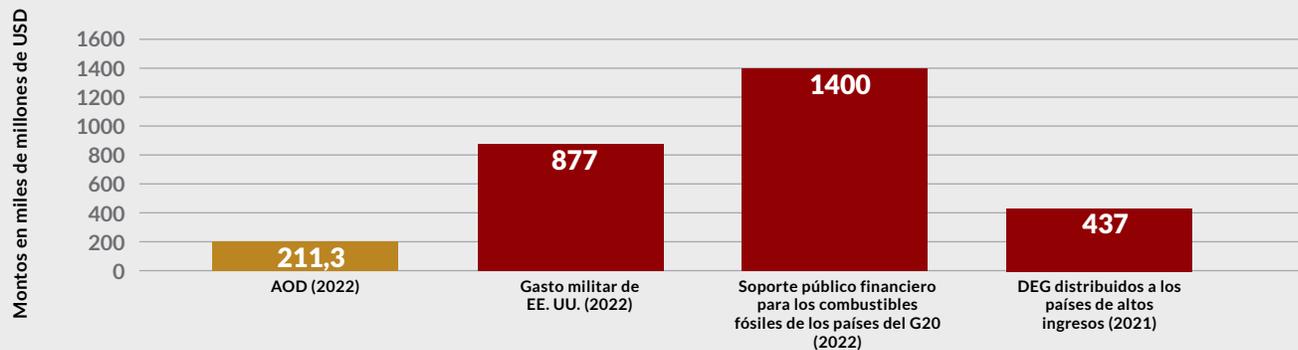


Figura 1.3: Comparación del gasto mundial en AOD en 2022 en relación con otros flujos, inclusive el gasto en militancia estadounidense, el gasto en subsidios para los combustibles fósiles por parte del G20 en 2022 y los DEG distribuidos a países de altos ingresos en 2021. (OCDE para el desarrollo, 2022; SIPRI, s.f.; Energy Policy Tracker, 2023; Eurodad, 2021).

FOCO DE ACTIVISMO DE ALCANCE GLOBAL

Reparaciones

Las demandas por reparaciones han resonado a lo largo de los países que han sido colonizados por décadas, y estas demandas han estado tomando más fuerza a raíz de la pandemia del COVID-19 y la deuda de la crisis galopante. Las reparaciones no sólo engloban tanto la compensación financiera como el reconocimiento de la responsabilidad por el pasado, sino que también tratan sobre democratizar las estructuras globales injustas que han permitido la persistencia de los legados coloniales y la necesidad de reparar los daños anteriores.²⁹

Muchos de estos pedidos se hacen en el contexto de demandas para cancelación de la deuda, como una «reparación y un derecho de las personas que salieron heridas y fueron sacrificadas a expensas del pago de deudas gravosas e ilegítimas, y que son quienes soportan la carga de la crisis climática».³⁰ Cuando la realeza británica recorrió el Caribe en 2022, la *Advocacy Network* activó demandas por reparaciones en Jamaica, y la Comisión Nacional de Reparaciones de Jamaica comenzó a revisar una petición que pretendía una compensación por parte del país británico por el comercio transatlántico de personas esclavizadas. Mientras tanto, en febrero de 2023, en medio de una crisis de deuda que cada vez empeora más, el Primer Ministro de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, presentó una demanda de compensación por las atrocidades cometidas por los imperialistas en el país.³¹

➔ **En general, los países más ricos del mundo y las personas con los mayores ingresos siguen obteniendo grandes ganancias de los combustibles fósiles, mientras ignoran sus obligaciones de financiamiento para el desarrollo. La transformación de nuestros sistemas económicos para promover la justicia climática, económica y de género debe sentar sus bases fundamentalmente en desafiar la búsqueda de crecimiento económico y brindar reparaciones para los países que sufrieron y seguirán sufriendo los daños de la crisis climática y del pago de deudas ilegítimas y coloniales.**

²⁹ Gender and Development Network, [Reparations as a pathway to decolonisation](#), 2023.

³⁰ WoMin African Alliance & CADTM Afrique, [Call to the African Union, African Heads of State, International Financial Institutions, Chinese Lending Bodies and Private Creditors for a total and unconditional cancellation of African debt!](#), n.d.

³¹ Gender and Development Network, [Reparations as a pathway to decolonisation](#), 2023.

II. DEUDA

Desde la época colonial, el norte global ha utilizado la deuda como una herramienta para extraer riquezas y recursos del sur global, lo que significa que la mayor parte de estas deudas son ilegítimas e injustas.³² En los últimos años, los niveles de deuda en el sur global han aumentado a un ritmo alarmante y, como resultado, implican consecuencias significativas para los derechos y el bienestar económico de las mujeres. La deuda, en simultáneo, conlleva a que los países vulnerables climáticamente no puedan destinar fondos a la mitigación, adaptación y a las pérdidas y daños. De esta manera, fuerzan a los gobiernos a contribuir aún más al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad para poder recaudar ingresos tributarios a través de industrias destructivas con el medioambiente, tales como los combustibles fósiles, la minería y la agricultura industrial, y destinar esos ingresos al pago de la deuda. Esto resulta en la magnificación de la deuda en un momento en el que el 93% de los países más vulnerables a la crisis climática está en una situación grave de insolvencia financiera para el pago de la deuda, o están cerca de estarlo.³³

AUMENTAR LA DEUDA ES CONTENER EL GASTO SOCIAL Y CLIMÁTICO

Desde el 2015 al 2022, se duplicó la proporción de países de bajos ingresos que están en un alto riesgo de sobreendeudamiento, o ya lo están, con un aumento de 30% a 60%.³⁴ El documento del Dispositivo de control de la deuda soberana a nivel mundial del 2022 indica que de los 148 países del sur global que fueron parte del sondeo, 135 enfrentan niveles críticos de endeudamiento. Entre ellos, se indica que hay 39 países que se encuentran en situación de endeudamiento crítico. Esta cantidad es tres veces mayor que la que había previo a la pandemia.³⁵

LA PROPORCIÓN DE PAÍSES DE BAJOS INGRESOS EN SOBRENDEUDAMIENTO O QUE ESTÁN CERCA DE ESTARLO SE DUPLICÓ DE 2015 A 2022

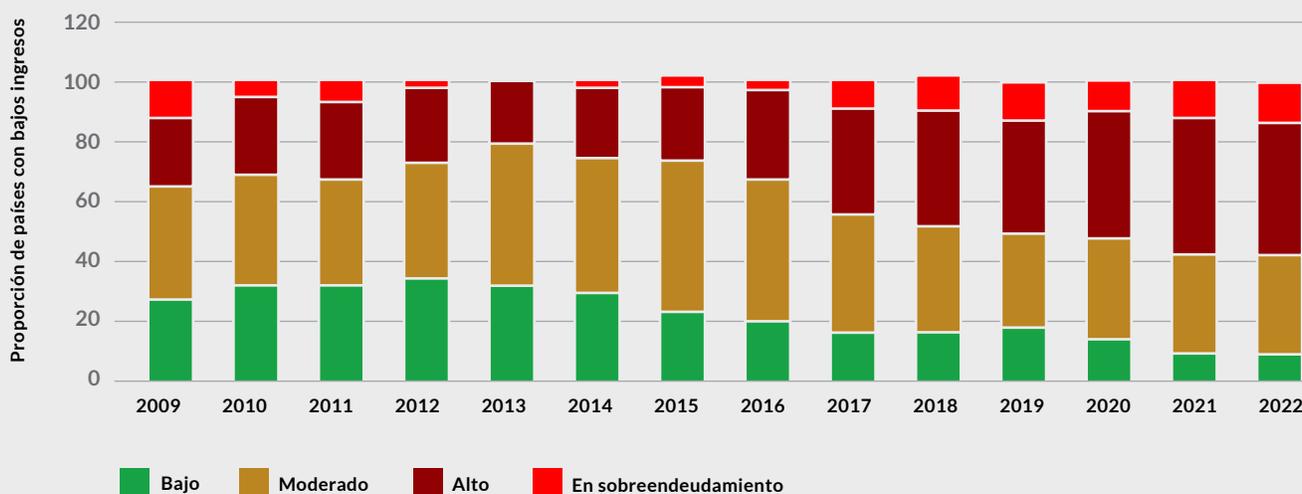


Figura 2.1: Proporción de los países de bajos ingresos (definidos como países bajo la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, ISSD) con análisis de sostenibilidad de la deuda de países de bajos ingresos, lo que indica el sobreendeudamiento, del 2009 al 2022 (FMI, 2022).

³² Debt Justice, [Colonialism and debt: how debt is used to exploit and control](#), 2022.

³³ ActionAid, [The Vicious Cycle: Connections between the debt crisis and climate crisis](#), 2023.

³⁴ FMI, [Informe Anual del 2022: Una crisis tras otra](#), 2022.

³⁵ MISEREOR & Erlassjahr.de, [Global Sovereign Debt Monitor 2022](#), 2022.

Los países están gastando más que nunca en el servicio de la deuda externa. **Entre el 2010 y el 2018, los pagos de la deuda externa de los gobiernos de los países en desarrollo aumentaron un 83% con respecto a la proporción de ingresos tributarios gubernamentales.** El monto de los pagos del servicio de la deuda que se le deben a los acreedores externos actualmente es el más alto desde fines de la década de 1990.³⁶ En 2022, los pagos de la deuda de los PMA y los PEID a los acreedores del G20 sumaron un total de USD 21 000 millones, esto significó un 50% de aumento con respecto a los USD 14 000 millones pagados en 2021. A pesar de los miles de millones ya pagados en intereses y en reembolsos de capital, en 2021 los países del G20 siguieron conservando USD 155 000 millones en deudas bilaterales con los PMA y los PEID.³⁷

Al tener una montaña de obligaciones a pagar a los países acreedores, las naciones tienen cada vez menos espacio fiscal para invertir en servicios públicos. El gasto público está disminuyendo en dos tercios de los países con los mayores pagos de la deuda entre el 2010 y el 2018.³⁸ En el 2020, 36 países gastaron más en el servicio de la deuda externa que en educación.³⁹ En el mismo año, en la época de la pandemia, los países gastaron, en promedio, más en los pagos del servicio de la deuda que en salud pública, que no fue el caso universal en 2016.⁴⁰

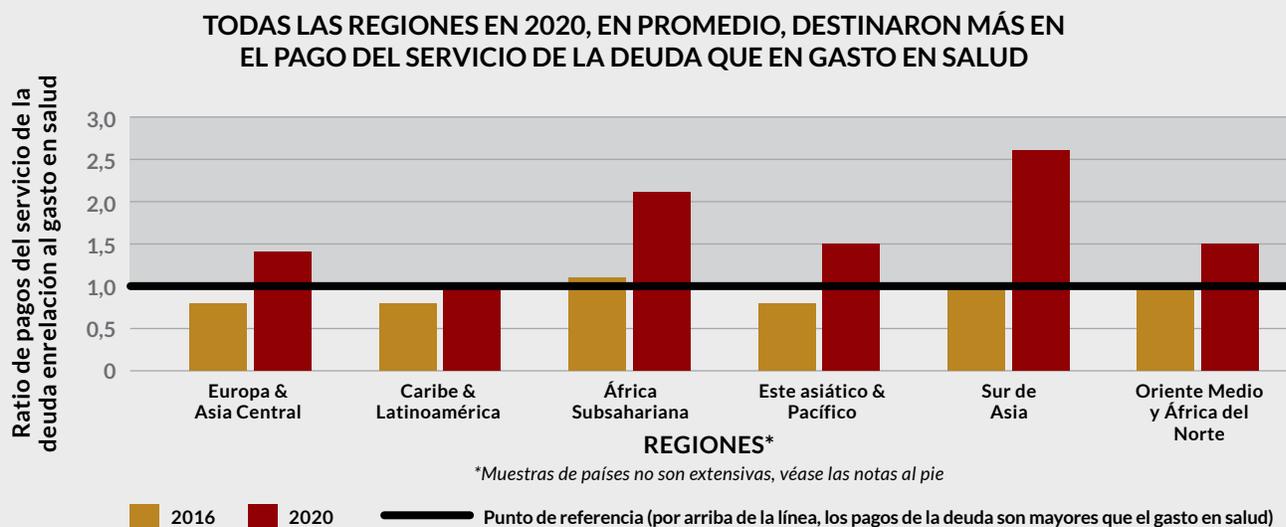


Figura 2.2: Cambio en el índice de pagos del servicio de la deuda con respecto al gasto en salud pública de 2016 a 2020 (ActionAid, 2022).⁴¹

Los países también están destinando más presupuesto al pago de la deuda de lo que reciben en financiamiento climático, inclusive algunos países gastan más que el total recibido en asistencia extranjera. **En el 2021, 59 PMA y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) gastaron un total de USD 33 000 millones en el pago de la deuda, mientras que solo recibieron USD 20 000 millones en calidad de financiamiento climático.** Tanto el valor total del pago de la deuda como el índice de los pagos de la misma con respecto al financiamiento climático fueron mayores que en el 2020. En 9 países, los pagos del servicio de la deuda en 2021 eran mayores que el total de la asistencia extranjera recibida.⁴²

³⁶ Eurodad, [Out of service: How public services and human rights are being threatened by the growing debt crisis](#), 2020.

³⁷ International Institute for Environment and Development (IIED), [Climate-vulnerable indebted countries paying billions to rich polluters](#), 2023.

³⁸ Eurodad, [Out of service: How public services and human rights are being threatened by the growing debt crisis](#), 2020.

³⁹ ActionAid, [The Care Contradiction: The IMF, Gender, and Austerity](#), 2022.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Los datos se basan en una muestra de 20 países de Europa y Asia Central, 23 países de Latinoamérica y el Caribe, 16 países del Sudeste de Asia y el Pacífico, 8 países en el Sur de Asia, y 10 países del Medio Oriente y el Norte de África.

⁴² Los 9 países son: Angola, Birmania, República Dominicana, Jamaica, las Maldivas, Senegal, Belice, Lesoto y Laos. IIED, [Drowning in debt: help for climate vulnerable countries dwarfed by repayments](#), 2023.



UBICACIÓN DE LUCHA LOCAL

Foto: Beatriz Ortiz Martínez

«¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!»

Los movimientos de mujeres en Latinoamérica están mostrando los vínculos que existen entre deuda, violencia de género, y financierización de la reproducción social, y los evidencian en sus acciones políticas. Una interpretación feminista de la deuda muestra como la deuda externa contraída por los Estados refuerza la dependencia de las mujeres con respecto a sus familias y aumenta su precariedad. Los países con sobreendeudamiento, con frecuencia, implementan medidas de austeridad, aumentan las tasas de interés y enfrentan depreciaciones de la moneda que resultan en la erosión del poder de compra de los hogares. El aumento del costo de vida que esta situación tiene como consecuencia presiona a las familias a asumir deudas, lo cual impone un serio desafío para viviendas que, en particular, tienen como cabeza de familia a mujeres, sumado a las responsabilidades extras de cuidados no remunerados. Como las familias enfrentan desafíos para solventar sus necesidades básicas, acuden a bancos y a acreedores que incitan un ciclo de mayor endeudamiento.⁴³

En este contexto, las protestas que se coordinan en pos de consignas que desafían la deuda no son una novedad en Argentina. La clásica frase «Fuera el FMI» que confronta a la deuda extranjera y la austeridad impuesta por el FMI data de la época de la dictadura militar (1976-1983). En 2017, el Colectivo Ni Una Menos lanzó la consigna «¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!» luego del primer paro feminista internacional, lo que estableció un nexo entre la violencia económica y de género. Detrás de este grito de lucha, tanto sindicatos, como trabajadoras y personas de género diverso pusieron la violencia diaria ejercida por la deuda en el centro de atención. En el 2022, durante el Día Internacional de la Mujer (o el #8M) protestantes se unieron bajo la consigna «La deuda es con nosotras»⁴⁴ y subvirtieron el guion al indicar que la deuda *se tiene con* las mujeres y las personas de género diverso, a quienes se les robó por medio de la violencia financiera.⁴⁵

⁴³ Limón, [¿Quién le debe a quién?](#), 2021.

⁴⁴ El #8M se refiere al 8 de marzo, la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer.

⁴⁵ Cavallero & Gago, [A Feminist Reading of Debt](#), 2021.

PROPUESTAS INADECUADAS DE REFORMAS

En respuesta a las demandas urgentes por el alivio de la deuda en el contexto de la pandemia del COVID-19, el G20 y el Club de París⁴⁶ establecieron el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda en noviembre del 2020. Al contrario de las demandas por la cancelación de la deuda y la esperanza por un avance en la reestructuración de la misma, el Marco se limita a la reestructuración de la deuda y se aplica sólo a una parte de la deuda contraída por solo 73 países de bajos ingresos.⁴⁷ Hasta ahora, solo 4 países solicitaron acceso al Marco Común (Chad, Etiopía, Ghana y Zambia) y en ningún caso resultó en un alivio significativo de la deuda.

Dos años después de solicitar el tratamiento en el 2020, Chad es el único país que terminó el proceso.⁴⁸ Los acreedores de este país decidieron que el mismo no necesitaba la cancelación plena de sus deudas debido a los ingresos tributarios alcistas, producto de los precios altos del petróleo. Esta situación fuerza a Chad, un país vulnerable climáticamente, a seguir dependiendo del petróleo en un momento en donde los países deberían estar llevando a cabo la transición para alejarse de combustibles fósiles intensivos en carbono.⁴⁹ Mientras tanto, la postulación de Etiopía al Marco Común tuvo como consecuencia una clasificación crediticia más baja, de «B» a «CCC»,⁵⁰ lo que implica un impacto negativo a largo plazo en su capacidad de garantizar un futuro crediticio, y que constituye una advertencia a otros países que podrían considerar aplicar. Además, al no incluir países de medianos ingresos, el Marco Común tampoco aborda la crisis de la deuda que actualmente sufren naciones como Sri Lanka y Surinam.⁵¹

En los últimos años, economías de bajos y medianos ingresos han experimentado cada vez más resiliencia con los acreedores privados, en especial titulares de bonos. **Para el 2021, los acreedores privados representaban el 61% del stock a largo plazo de la deuda externa pública y con garantía pública, lo que suma un total de USD 3,6 billones.** Mientras que los acreedores privados suelen poner menos condicionalidades que directamente implican medidas austeras, también suelen tener menos aranceles preferenciales que los acreedores gubernamentales bilaterales o las instituciones multilaterales como el FMI. Esto tiene como consecuencia un aumento significativo de los requisitos del servicio de la deuda.⁵²

Sin embargo, el Marco Común no obliga a los acreedores privados a participar,⁵³ es decir que cualquier alivio de la deuda que reciban los países puede ser redireccionado al servicio de la deuda privada, en lugar de destinarlo al gasto crítico en clima o servicios sociales.⁵⁴ De hecho, conforme al Marco Común, se reconoce que los acreedores privados se benefician del retraso del alivio de la deuda, incluso pueden estar intencionalmente negándose a las negociaciones para maximizar sus ganancias por la tenencia de bonos. **Si los bonos de Etiopía, Ghana, Sri Lanka, Surinam y Zambia comprados por los acreedores privados fuesen adquiridos al precio devaluado actual y se pagara su totalidad, los acreedores podrían obtener ganancias de hasta USD 30 000 millones, sumados a las tasas de intereses de las primas que ya agregaron para cubrirse de los riesgos.**⁵⁵

⁴⁶ El Club de París se constituye por una cartera de acreedores secretos y antidemocrática cuyo principal objetivo es maximizar la remuneración de sus préstamos. Véase [Civil Society Statement on the Paris Club at 50: illegitimate and unsustainable](#), 2006.

⁴⁷ Eurodad, [The debt games: Is there a way out of the maze?](#), 2023.

⁴⁸ La conclusión de las negociaciones de la deuda de Zambia se enunció en la Reunión Anual del FMI y Banco Mundial 2023 en Marruecos, también dos años después de la petición inicial en conformidad con el Marco Común. Sin embargo, las discrepancias entre los titulares de bonos de Zambia lograron la nulidad efectiva del acuerdo, lo que aumenta la preocupación sobre el Marco Común. Véase: University of Oxford, Faculty of Law: ["Is Zambia the Piece that will Break the International Financial Architecture?"](#) 2024. También véase: Debt Relief for Green and Inclusive Recovery, ["Winner Takes All – Twice: How Bondholders Triumph, Before and After Debt Restructuring,"](#) 2023 y Debt Justice UK, ["Zambia \(almost\) debt deal,"](#) 2023. Este caso se investigará más en detalle en la siguiente entrega de Informe de tendencias, a fines del 2024.

⁴⁹ Bretton Woods Project, [Chad gets debt rescheduling, not relief, and is left dependent on oil revenues](#), 2022.

⁵⁰ Fitch Ratings, [Fitch Downgrades Ethiopia to 'CCC'](#), 2021.

⁵¹ Eurodad, [The debt games: Is there a way out of the maze?](#), 2023.

⁵² World Bank Group, [International Debt Report 2022](#), 2022.

⁵³ Eurodad, [The debt games: Is there a way out of the maze?](#), 2023.

⁵⁴ World Bank Group, [International Debt Report 2022](#), 2022.

⁵⁵ Debt Justice, [The potential profit for bondholders if debts are not canceled](#), 2023.

Muchos países solicitaron la extensión de la moratoria aplicada al pago de la deuda en vista de las emergencias climáticas o la pandemia. Como resultado, el Banco Mundial y varios acreedores bilaterales recientemente se comprometieron a incluir «cláusulas de pausa» en futuros contratos de deuda. Este es el tema central de la Iniciativa de Bridgetown, formulada a raíz del liderazgo de la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, ya que estas cláusulas les permitirán a los países del sur global pausar los pagos de la deuda en caso de futuros desastres climáticos. Pero dichas cláusulas de pausa no abordan la enorme cantidad existente de pagos de la deuda en un momento en que **61 países, de los cuales la mayoría son climáticamente muy vulnerables, necesitan alivio inmediato de la deuda, al encontrarse o estar cerca de una situación grave de sobreendeudamiento**. Las medidas acordadas hasta ahora tampoco abordan otras emergencias, tales como pandemias o una necesidad a largo plazo de adaptación climática.⁵⁶

FOCO DE ACTIVISMO DE ALCANCE GLOBAL

Demandas por un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda de la ONU

Los países del sur global y las personas activistas de la sociedad civil han abogado por un mecanismo de reestructuración de la deuda de la ONU como una alternativa a la arquitectura internacional actual de gobernanza de la deuda, la cual está encabezada por el FMI, y que a su vez es antidemocrática. Este mecanismo de la ONU les otorgaría un lugar equitativo a los intereses de los países deudores, en lugar del statu quo de una arquitectura de la deuda dominada por los acreedores.⁵⁷

Sin embargo, hasta ahora no hubo mucho progreso. En 2014, pareció asomarse un rayo de luz en la ONU ya que el G77 y China (el bloque de negociación más grande de países en desarrollo) comprometieron a la Asamblea General para que trabaje en establecer un marco legal multilateral para la resolución de la deuda soberana. Sin embargo, los gobiernos del G7 (titulares de la mayoría de las deudas de los países de bajos y medianos ingresos) no cooperaron y muchos boicotearon las negociaciones.⁵⁸ El proceso culminó en una serie de principios que incluían los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana de la ONU y la Hoja de Ruta y Guía para la Reestructuración de la Deuda Soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).⁵⁹ Si bien la inclusión de estas herramientas es útil para la normativa del marco, estos principios no son vinculantes y son de naturaleza voluntaria, lo que significa que tienen muy poco impacto sobre el derecho consuetudinario internacional.⁶⁰

➔ ***En conclusión, la ambición multilateral por la reforma de la deuda no brinda un alivio significativo de la deuda, ni aborda las causas de origen de la crisis de la deuda que es cada vez mayor. Debido a que el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los países a las conmociones, su capacidad de respuesta se ve afectada por una carga de la deuda en crecimiento y una reducción de categoría crediticia. Los países del norte global son los menos afectados por la crisis de la deuda y son el hogar de la mayoría de los acreedores privados que incentivan los retrasos de los alivios de la misma. Esta dinámica desigual implica que la resolución de la deuda, y en específico su cancelación, deba ser impulsada por el espacio más democrático de la ONU.***

⁵⁶ The Guardian, [World Bank offers developing countries debt pauses if hit by climate crisis](#), 2023.

⁵⁷ Eurodad, [2023: A more just world is still possible](#), 2023.

⁵⁸ Eurodad, [We can work it out: 10 civil society principles for sovereign debt resolution](#), 2019.

⁵⁹ UNCTAD, [Hoja de Ruta y Guía para la Reestructuración de la Deuda Soberana](#), 2015; Asamblea General de la ONU, [Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana](#), 2015.

⁶⁰ Eurodad, [We can work it out: 10 civil society principles for sovereign debt resolution](#), 2019.

III. TRIBUTACIÓN

Para lograr la redistribución de la riqueza, tanto dentro como entre países, y para movilizar el financiamiento público en favor del bienestar social, es esencial un sistema fiscal justo e igualitario. Sin embargo, los países más ricos del mundo han dominado por décadas el régimen fiscal internacional, en particular a través del liderazgo de la OCDE, una organización intergubernamental compuesta por 38 países miembro (de los cuales, la mayoría son de altos ingresos) y que está comprometida con los ideales del capitalismo de libre comercio. Las consecuencias de esta gobernanza asimétrica son atroces: los países del sur global pierden miles de millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal; situación que, en su mayoría, es impulsada por las empresas multinacionales que se encuentran ubicadas en países miembro de la OCDE. Sumado a estas pérdidas, las políticas fiscales por lo general son regresivas, es decir que los países dependen cada vez más de los impuestos al consumo, lo cual afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y a los hogares cuya cabeza de familia son mujeres.

ABUSO FISCAL CORPORATIVO Y SISTEMAS FISCALES

Los países miembros de la OCDE albergan a las empresas multinacionales (EMN) que impulsan los mayores flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, y constituyen algunos de los paraísos fiscales más grandes. **Los datos del 2023 revelan que los países de altos ingresos son responsables por el 99,3% de todas las pérdidas fiscales anuales del mundo producto del abuso fiscal corporativo.** Aproximadamente el 75% de esas pérdidas terminan en paraísos fiscales de países miembros de la OCDE, tales como el Reino Unido, el territorio británico de ultramar Bermudas, el territorio estadounidense Puerto Rico, Singapur, Países Bajos y Luxemburgo.⁶¹ **En el 2023, la Red para la Justicia Fiscal informó que los países pierden aproximadamente USD 480 000 millones anuales por la evasión de impuestos y el traslado de beneficios por parte de las EMN y de individuos con gran capacidad de adquisición económica; de ese monto total se pierden USD 311 000 millones, o aproximadamente dos tercios, en traslados de beneficios corporativos a paraísos fiscales.**⁶²

Estos niveles alarmantes de abuso fiscal corporativo implican que los países de bajos ingresos tengan menor capacidad para brindar servicios públicos o para invertir en financiamiento climático. Si bien las economías más grandes tienen pérdidas más considerables (USD 433 000 millones anuales, conforme a los datos del 2022), cuando se tiene en cuenta el presupuesto destinado a servicios públicos esenciales, tales como bienestar, salud, o educación, en proporción a las pérdidas de los países de bajos ingresos (USD 47 000 millones anuales), estas tienen un mayor impacto. Una pérdida de USD 433 000 millones para los países de altos ingresos representa aproximadamente el 9% del presupuesto de salud pública, mientras que una pérdida de USD 47 000 millones en ingresos tributarios para países de bajos ingresos representa el 49% del presupuesto de salud pública.⁶³

⁶¹ Tax Justice Network, [State of Tax Justice 2023](#), 2023.

⁶² Ibidem.

⁶³ Ibidem.

LOS PAÍSES DE BAJOS INGRESOS PIERDEN EN ABUSO FISCAL TRANSFRONTERIZO UN EQUIVALENTE MAYOR A LA MITAD DE LOS PRESUPUESTOS EN SALUD PÚBLICA

Pérdida fiscal en proporción al presupuesto de salud pública



Figura 3.1: Comparación de las pérdidas fiscales a través del abuso fiscal transfronterizo como una parte de los presupuestos de salud pública en países de altos ingresos versus países de bajos ingresos (Red para la Justicia Fiscal, 2023)

Además de los miles de millones que se perdieron a través de los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, las tasas de ingresos fiscales corporativos, en general, han disminuido a lo largo de las últimas décadas. Esto restringe cada vez más el espacio fiscal de los países para invertir en servicios públicos. **Desde la década de 1980, producto de la aceleración de las políticas neoliberales, las tasas fiscales corporativas promedio conforme a los estatutos y a nivel mundial han disminuido más de la mitad entre 1985 y 2018, pasando de un 49% a un 24%.⁶⁴** La mayoría de los países actualmente tienen una tasa fiscal corporativa por debajo del 30%.⁶⁵ Recientemente, en el 2022, diez países disminuyeron las tasas fiscales corporativas, lo que demuestra que se mantiene la tendencia general de los países de recortar su ingreso fiscal corporativo. En el mismo período, sólo seis países aumentaron las tasas fiscales corporativas más significativas.⁶⁶ Este cambio refleja las presiones existentes para alentar la inversión extranjera directa.⁶⁷

Al mismo tiempo, el FMI alienta a los países a que aumenten los impuestos regresivos sobre los bienes de consumo, lo cual tiene como consecuencia una mayor carga desproporcionada sobre las personas de bajos ingresos. **Durante el COVID-19, de los 107 préstamos para la recuperación económica que se negociaron entre los gobiernos y el FMI entre marzo del 2020 y marzo del 2021, el FMI propuso el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) en 14 países.⁶⁸** Esta situación obedece a una tendencia persistente: entre los años 1990 y 2017, los países solían reemplazar a gran escala ingresos progresivos e impuestos corporativos por impuestos regresivos como el IVA, a raíz de las condicionalidades de los préstamos del FMI. En lugar de aplicar la carga tributaria en las personas con mayores ingresos, que pueden solventar el pago de mayores impuestos, el IVA aumenta aún más el daño hacia las mujeres, ya que restringe la capacidad de suplir sus necesidades básicas.

⁶⁴ World Inequality Lab, [World Inequality Report 2022](#), 2021.

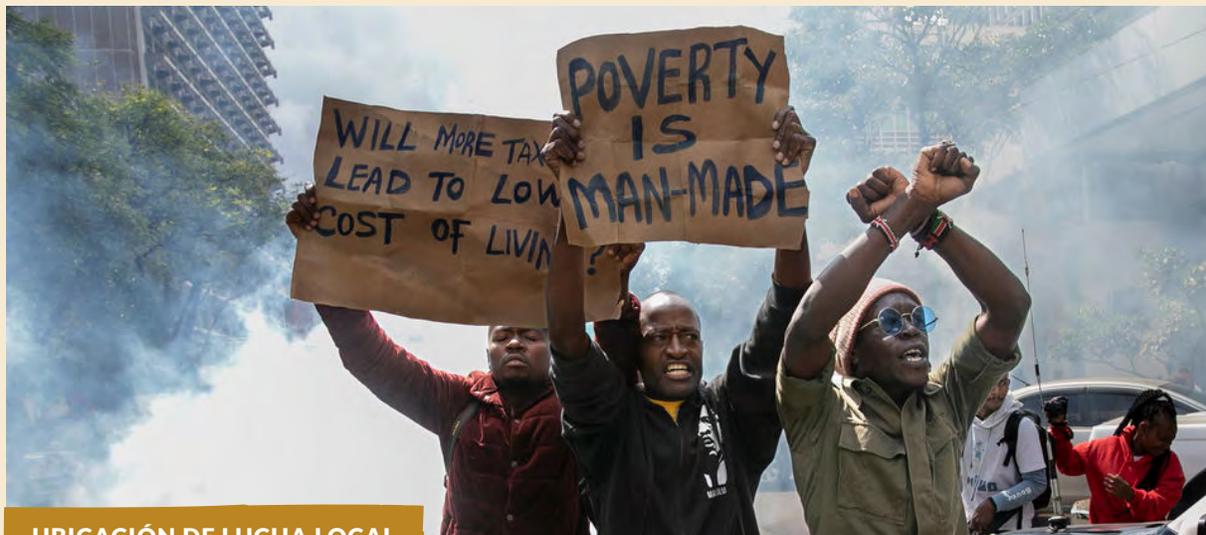
⁶⁵ Tax Foundation, [Corporate Tax Rates Around the World, 2022](#), 2022.

⁶⁶ Los diez países que redujeron las tasas fiscales corporativas son: Seychelles, Sierra Leona, Zambia, Bangladesh, Birmania, Tayikistán, Francia, Grecia, Mónaco y Polinesia Francesa. Mientras que los seis países que aumentaron las tasas son Colombia, Sudán del Sur, Países Bajos, Turquía, Chile y Montenegro; aunque Turquía fijó reestablecer su tasa fiscal corporativa previa al 2022 en 2023.

⁶⁷ Tax Foundation, [Corporate Tax Rates Around the World, 2022](#), 2022.

⁶⁸ Oxfam, [Adding Fuel to the Fire: How IMF demands for austerity will drive inequality worldwide](#), 2021.

Esto se debe a que el IVA, como impuesto regresivo al consumo recaudado por los vendedores a lo largo de la cadena de valores, disminuye el poder de compra de los consumidores, en lugar de ser una forma de tributación directa y dirigida para las personas de altos ingresos.⁶⁹



UBICACIÓN DE LUCHA LOCAL

Foto: Tony Karumba / AFP

Protestas masivas en Kenia por el aumento de impuestos regresivos sobre bienes esenciales

A principios del 2023, el gobierno de Kenia introdujo una nueva ley financiera con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales públicos destinados al servicio del pago de su deuda internacional, el cual incluye un 1,5% de impuesto a la vivienda y duplica el impuesto a los productos derivados del petróleo de un 8% a un 16%.⁷⁰ Estos cambios dispararon inmediatamente un aumento en los costos de transporte, que a su vez repercutió en otros sectores, como en el caso de los precios de bienes básicos, tales como el pan o la harina de maíz, que incrementaron desmesuradamente. Esto ha tenido un gran impacto en las ganancias netas de las personas con bajos ingresos, y, a su vez, aumenta la carga en las mujeres y en los hogares que tienen como cabeza de familia a mujeres, ya que gastan una mayor proporción de sus ingresos en los bienes esenciales incluidos en el aumento de impuestos.⁷¹ El aumento en los costos de transporte también puede limitar la movilidad de las mujeres, en particular de aquellas que viven en áreas rurales.⁷²

Debido a que las EMN y las personas con altos ingresos continúan ganando miles de millones a través del abuso y la evasión fiscal, protestantes de Kenia tomaron las calles en julio de 2023 en reclamo de los aumentos de los impuestos sobre los bienes esenciales. Las protestas fueron insistentes y generaron consecuencias graves: murieron más de 23 personas y cientos fueron arrestadas.⁷³

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Al Jazeera, [Kenya braces for 3 days of anti-government protests: All the details](#), 2023.

⁷¹ Al Jazeera, [Kenya's opposition set for a second day of tax hike protests](#), 2023.

⁷² DW, [Kenya's planned tax hikes spark anger](#), 2023.

⁷³ Al Jazeera, [Kenya's opposition set for a second day of tax hike protests](#), 2023.

SOLUCIONES INADECUADAS DE REFORMAS

La OCDE (que tal como se mencionó previamente, funciona por fuera del sistema multilateral global y está compuesta sólo por gobiernos ricos) ocupó el cargo para reformar el sistema fiscal global para abordar los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos, en particular desde 2016 con la introducción del Marco Inclusivo sobre Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE y el G20.⁷⁴ A pesar de que el Marco Inclusivo representó la primera oportunidad razonable de que los países que no forman parte de la OCDE participen en la constitución de reglas sobre tributación, excluye más de dos tercios de los PMA. Solo 27 de 54 países africanos son miembros del Marco, en parte porque muchos se niegan a ser parte de una propuesta en la que no tienen mucho para decir.⁷⁵ Si bien se suponía que iba a entrar en vigencia en el 2023, la implementación del Marco Inclusivo se pospuso para el 2024.⁷⁶

El Marco Inclusivo tiene como objetivo forzar a las EMN más grandes del mundo a pagar más impuestos en los países en donde están generando ganancias. Si bien es un cambio portentoso con respecto al sistema previo, en el cual la tributación dependía en gran parte de la presencia física de las EMN, es una gran preocupación el alcance exiguo que tiene. El Marco aplica solo a beneficios residuales con una rentabilidad por encima del 10% sobre los ingresos tributarios y abarca apenas a más de 100 EMN grandes con una facturación global de al menos € 20 000 millones. Tampoco cubre los impuestos de las EMN por los servicios digitales, lo que dejaría a empresas como Amazon libres de responsabilidades.⁷⁷

Producto del amparo de los líderes del G20 en el 2021, el Marco también busca establecer una tasa impositiva corporativa mínima a nivel mundial de un 15%.⁷⁸ Sin embargo, la vigencia es un tema de discreción nacional y aplica solo a EMN con una facturación de ingresos consolidados a nivel global que excede los € 750 millones.⁷⁹

Esta situación excluye aproximadamente entre el 80% y 90% de las empresas del mundo.⁸⁰ Además, la mayoría de los análisis progresistas concuerdan en que el 15% de mínimo es muy bajo, de hecho, la ONU y los paneles independientes solicitan tasas impositivas corporativas a nivel mundial de entre 20% y 30%.⁸¹ **Una tasa impositiva corporativa mínima de 25% impulsaría casi USD 17 000 millones más en ingresos tributarios para los 38 países más pobres del mundo.**⁸²

Además de las reformas lideradas por la OCDE, la edición de herramientas de medida y lineamientos metodológicos sobre flujos financieros ilícitos de la UNCTAD representa un desarrollo clave en el esfuerzo por combatir el abuso fiscal a nivel global. En el 2020, la UNCTAD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicaron un *Marco Conceptual para la Medición Estadística de Flujos Financieros Ilícitos*, el cual constituye el primer intento de conceptualizar los flujos financieros ilícitos y de medirlos desde mercados legales seleccionados en un intento de generar mejores estadísticas para obtener una realidad más clara de estos flujos.⁸³

74 Las BEPS se refieren a estrategias utilizadas por entidades empresariales para explotar incompatibilidades en las reglas tributarias que les permitan trasladar sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación.

75 IMF, [International Corporate Tax Reform](#), 2023.

76 Ibidem.

77 Eurodad & LSE, [Is the OECD 2021 corporate tax deal fair?](#), n.d.

78 The Guardian, [G20 Leaders to Endorse Biden Proposal For Global Minimum Corporate Tax Rate](#), 2021.

79 IMF, [International Corporate Tax Reform](#), 2023.

80 IMF, [International Corporate Tax Reform](#), 2023.

81 En el 2021, el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales de la ONU (FACTI, por sus siglas en inglés) recomendó entre un 20% y un 30% de impuestos corporativos a nivel mundial. Mientras tanto, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) demandó un mínimo de 25% de tasa impositiva corporativa a nivel mundial.

82 Oxfam, [OECD deal on track to become rich country stitch-up: Oxfam](#), 2021.

83 UNCTAD, [Conceptual Framework for the Statistical Measurement of Illicit Financial Flows](#), 2020.

Convención Marco de las Naciones Unidas para la tributación

Las organizaciones de la sociedad civil han luchado durante mucho tiempo por una Convención de las Naciones Unidas para la Tributación, catalogándola como «un paso más adelante en la lucha internacional en contra de los paraísos fiscales y de la evasión de impuestos a nivel internacional de la población y las empresas más ricas del mundo».⁸⁴ Esta convención sería multilateral y vinculante, similar a la de la CMNUCC, y permitiría el empoderamiento de los gobiernos para ejercer una mayor soberanía sobre las decisiones fiscales que afectan sus economías y, al mismo tiempo, desarticularía el poder del sistema de gobernanza fiscal liderado por la OCDE.⁸⁵ Estos cambios tendrían un gran potencial para mejorar los impuestos a las ganancias, los impuestos a las ganancias excesivas de las empresas de combustibles fósiles, para terminar con la elusión fiscal de las empresas multinacionales, para combatir el secreto financiero, y para cambiar el poder de las negociaciones fiscales internacionales a fin de que sean más inclusivas y efectivas.⁸⁶

A modo de muestra trascendental de apoyo hacia un sistema mundial de gobernanza fiscal renovado, en noviembre del 2023, la Asamblea General de la ONU dictó una resolución con el objetivo de crear una Convención Marco de las Naciones Unidas para la Tributación. Publicada por el el Grupo de Estados Africanos y al ser impulsada por el Secretario General de la ONU dentro de su propuesta en agosto de 2023,⁸⁷ la resolución establece una moción para que el comité intergubernamental determine los términos de referencia de la convención para agosto del 2024.⁸⁸ Si bien países del norte global han objetado la propuesta, contar un frente unido de la sociedad civil y los países del sur podría garantizar que se aviste un nuevo sistema de gobernanza tributaria global.⁸⁹



En conclusión, los países siguen siendo víctimas del abuso fiscal desenfrenado, mientras continúan siendo presionados por mantener bajos los impuestos corporativos y a las ganancias y por aumentar los impuestos regresivos al consumo para compensar el déficit de los ingresos públicos fiscales. El sistema fiscal global dominado por la OCDE no hará mucho para resolver estas desigualdades estructurales, pero la esperanza por establecer una Convención Marco de las Naciones Unidas para la Tributación finalmente está comenzando a asomarse.

⁸⁴ Eurodad, [Growing support for a UN Convention on Tax](#), 2023; see also Eurodad, Proposal for a United Nations Convention on Tax, 2022 for a full proposal on what this convention could look like.

⁸⁵ Tax Justice Network, [State of Tax Justice 2023](#), 2023.

⁸⁶ Global Alliance for Tax Justice, [Tax Justice, Not Greenwashed "Innovation": A Feminist Perspective on the Paris Summit](#), 2023.

⁸⁷ UN General Assembly, [Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations: Report of the Secretary-General \(Advance unedited version\)](#), 2023.

⁸⁸ Global Policy Forum, [Reforms to the global financial architecture](#), 2023.

⁸⁹ Eurodad, [A UN Convention on Tax - momentum just keeps growing](#), 2023. También véase: Global Alliance for Tax Justice, ["Historic UN Tax Vote - A Tremendous Win for Africa and the Global Fight for Tax Justice"](#), 2023.

IV. GOVERNANZA ECONÓMICA GLOBAL

Las Instituciones Bretton Woods (BWI), desde sus comienzos en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, proceso que fue liderado por el norte global colonial y al que asistieron solo 44 países, y actualmente conformadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han tenido una gran influencia en la gobernanza económica mundial. Las raíces coloniales se manifiestan en un déficit democrático en la toma de decisiones, lo que suscita que los países del sur global tengan acceso limitado a los recursos y que se les impongan medidas austeras estrictas en relación al control del gasto público a través de las condicionalidades de los préstamos. Estas medidas impactan de forma desmesurada en los países de bajos ingresos que poseen una baja o nula influencia en la toma de decisiones, y el impacto dentro del país recae, en especial, sobre las mujeres y las personas de género diverso.

DÉFICITS DEMOCRÁTICO EN LAS BWI

El FMI ha sido criticado durante mucho tiempo por activistas de la sociedad civil y por países del sur global por su estructura, la cual implica la regla de «1 dólar, 1 voto» y un proceso de toma de decisiones con base en la cuota.

Alrededor de 36 economías avanzadas y de altos ingresos tienen la mayor porción de votos en el FMI, con el 59% aproximadamente.⁹⁰ El PBI constituye la mitad del factor determinante de la proporción de voto de un país en el FMI, es decir que mientras más rico sea el país, más poder de toma de decisión posee. Sin embargo, el 30% de la distribución de las cuotas se determina por la «apertura» de un país: el volumen actual de pagos de cuenta y transferencias. Esto se basa en la interpretación subjetiva del FMI de que los países salen beneficiados de la integración del comercio y financiamiento internacionales, a pesar de que la evidencia muestra que el liberalismo deja a muchos países del sur global en una situación de vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y las crisis financieras.

La distribución de las cuotas también determina la cantidad de Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a los países miembros del FMI, es decir que los países ricos reciben la mayor parte de la distribución. **De los USD 650 000 millones en DEG nuevos que se propusieron en el 2021, solo USD 7 000 millones fueron asignados a países de bajos ingresos, mientras que la mayor parte de dicho monto se adicionó a los fondos de los países del norte global, sin que exista la posibilidad de poder transferirlos a otros países debido a estipulaciones de legislación nacional.**⁹¹

LOS PAÍSES DE ALTOS INGRESOS RECIBIERON LA MAYOR PARTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 650 000 MILLONES EN DEG

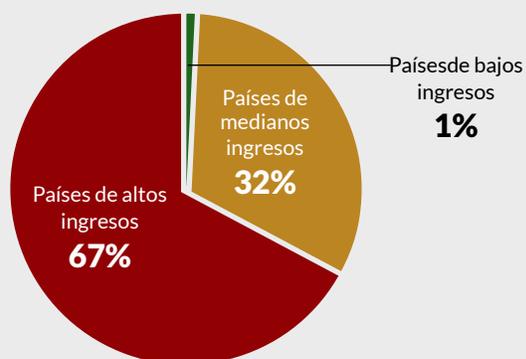


Figura 4.1: USD 650 000 millones de asignación de DEG según el nivel de ingresos del país (Eurodad, 2021).

⁹⁰ Bretton Woods Project, [IMF and World Bank decision-making and governance](#), 2020.

⁹¹ Eurodad, [The 3 trillion dollar question: What difference will the IMF's new SDRs allocation make to the world's poorest?](#), 2021.

Sin una reforma significativa de las cuotas del FMI, será imposible llevar a cabo cualquier otra propuesta de reforma de la mencionada entidad financiera y su rol en la gobernanza económica mundial. **Estados Unidos tiene un poder de veto automático sobre los aumentos de cuota y la distribución de la proporción de votos, ya que dichas decisiones requieren un 85% de mayoría y EE. UU. tiene más del 15% de la proporción de votos.**⁹² El FMI revisa periódicamente las cuotas, de hecho, la revisión más reciente se llevó a cabo en diciembre del 2023 sin haberse registrado cambios en la fórmula ni tampoco ningún tipo de modificaciones.⁹³ Durante los últimos 30 años solo se han registrado dos aumentos en la proporción de las cuotas, lo que demuestra la rigidez del sistema existente.

El Banco Mundial también está regido por procesos de toma de decisiones antidemocráticos, tal como lo evidencia la designación, a comienzos del 2023, del ex CEO de Mastercard, Ajay Banga, como el nuevo presidente del Banco Mundial. Este nombramiento de Banga, emerge del proceso colonial de selección de liderazgo de las BWI, que está determinado por un «acuerdo de caballeros», el cual establece que el presidente del Banco Mundial siempre debe ser estadounidense, mientras que el director ejecutivo del FMI siempre será europeo.⁹⁴ Incluso antes de que técnicamente comenzara el período de nominación, otros países del norte global apoyaban a Banga, cuya orientación hacia el capital privado y su falta de experiencia en desarrollo deberían haber sido suficiente para que se lo desacredite.⁹⁵

LA AUSTERIDAD DEL FMI SOCAVA LOS DERECHOS HUMANOS

Desde la introducción de programas de ajuste estructural en la década de 1980, es frecuente que el FMI adjunte condicionalidades a las políticas impulsadas durante su liderazgo en los países en desarrollo, las cuales estipulan reducciones en los gastos públicos, que, como consecuencia, aumentaban la pobreza y la desigualdad en los ingresos. Debido al rol dominante de las economías avanzadas en la toma de decisiones del FMI, son estas las que determinan las condicionalidades que incluyen los préstamos del FMI, sin nunca haber tenido que enfrentar las políticas de asesoramiento del FMI o sufrir los efectos de estas condicionalidades.⁹⁶

PAÍSES CON LA MENOR PORCIÓN DE VOTOS EN EL FMI Y QUE HAN COMPLETADO LA MAYORÍA DE LOS PROGRAMAS DEL FMI

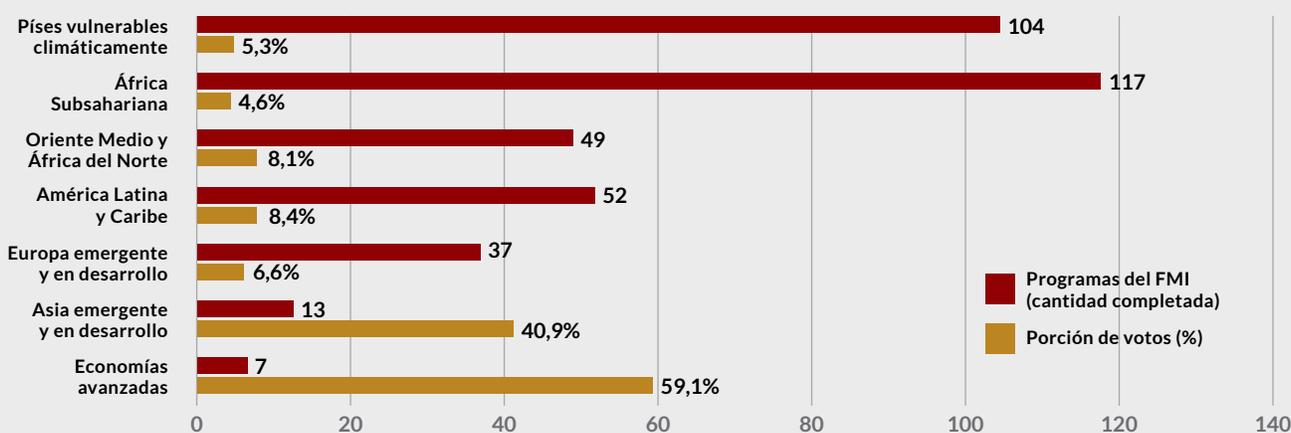


Figura 4.2: Comparación de la votación de la proporción de votos del FMI de los bloques de países con el número de programas de préstamos del FMI completos desde el 2002. Véase que las proporciones de los votos y los programas del FMI se miden con indicadores diferentes, por lo que las proporciones de los votos nunca excederán el 100 del eje horizontal. (Boston University Global Development Policy Center, 2022).

⁹² Véase Christian Aid, [The 16th IMF quota review: Opportunities for greater representation of the global South in international economic decision-making](#), 2023.

⁹³ Devex, [“Opinion: IMF rules continue to be rigged against the world’s poorest,”](#) 2023.

⁹⁴ Center for Global Development, [Time, Gentlemen, Please](#), 2019.

⁹⁵ Bretton Woods Project, [Democratic Deficit in the World Bank Presidential Appointment](#), 2023.

⁹⁶ Boston University Global Development Policy Center, [No Voice for the Vulnerable: Climate change and the need for quota reform at the IMF](#), 2022.

A pesar de la obligación que alega de asistir a los países a recuperarse de la pandemia, el FMI sigue incluyendo medidas austeras mano a mano con los programas del COVID-19. **De los 107 préstamos que suman USD 107 000 millones y que se negociaron entre los gobiernos y el FMI para la recuperación económica pos-COVID, entre marzo del 2020 y marzo del 2021, 90 préstamos exigen medidas austeras como condición para el financiamiento.** En estos préstamos, el FMI propuso recortes en los gastos públicos para 55 países, recortes en el gasto salarial, y el congelamiento para 31 países, como así también un aumento en el impuesto al valor agregado en 14 países.⁹⁷ Esto ha resultado en la erosión del Estado de bienestar y del rol del financiamiento público, lo que restringe el acceso a los servicios sociales para las mujeres y otras personas que enfrentan discriminación.⁹⁸

Además, la respuesta del FMI al COVID-19 solo siguió exacerbando la deuda soberana a expensas de la prestación de servicios sociales.⁹⁹ Se estima que para el 2023, los gobiernos de 59 países de bajos y medianos ingresos gastarán menos en servicios sociales de lo que gastaron en la década del 2010.¹⁰⁰ En los lugares donde hay presupuesto para el gasto social, los préstamos del FMI tienden a favorecer programas focalizados en lugar de abogar por la protección social universal.¹⁰¹ Los programas focalizados tienen un alcance acotado de protección y utilizan procesos de selección que son costosos, imprecisos y que, en definitiva, excluyen a muchas personas de la posibilidad de aplicar, y también acrecientan el estigma sobre la protección social debido a la necesidad de aplicar.¹⁰²

En respuesta a las críticas acerca de la austeridad impuesta por el FMI, desde el 2019, esta institución ha estado implementando «pisos de gasto social» como parte de sus condicionalidades de préstamo. Estos pisos representan un nivel mínimo de gasto público en servicios sociales tales como educación, salud, y protección social. Los países deben acordar mantener estos pisos, incluso bajo medidas de consolidación, por lo general, solicitadas por los programas respaldados por el FMI. Sin embargo, en la práctica, los pisos de gasto social normalmente les ceden el lugar a las condicionalidades de austeridad. **Un análisis de Oxfam sobre los pisos de gasto social del FMI en los programas de préstamos de países de bajos y medianos ingresos desde el 2020 hasta el 2021 reveló que por cada dólar que el FMI alentaba a los países a gastar en bienes públicos, les exigía, al mismo tiempo, que recortaran cuatro veces más mediante las medidas de austeridad.**¹⁰³

⁹⁷ Oxfam, [Adding Fuel to the Fire: how IMF demands for austerity will drive inequality worldwide](#), 2021.

⁹⁸ Ibidem.

⁹⁹ Eurodad, [Out of service: How public services and human rights are being threatened by the growing debt crisis](#), 2020.

¹⁰⁰ Oxfam, [IMF Social Spending Floors: A fig leaf for austerity?](#), 2023.

¹⁰¹ Se observaron recomendaciones de gasto social dirigido en Sierra Leona, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Chad, Georgia, Mauritania, Mongolia, Madagascar, Egipto, y Colombia.

¹⁰² Oxfam, [Adding Fuel to the Fire: how IMF demands for austerity will drive inequality worldwide](#), 2021.

¹⁰³ Oxfam, [IMF Social Spending Floors: A fig leaf for austerity?](#), 2023.

Justicia climática en Pakistán: la cancelación de la deuda es un derecho, no un favor

Países vulnerables al clima como Pakistán han solicitado el alivio de la deuda en medio de los impactos de la crisis que, como siempre, cada vez empeoran más, pero al final instituciones como el FMI solo cargan a estos países con más deuda. En el 2022, hubo inundaciones devastadoras en este país que afectaron a 33 millones de personas y las pérdidas sumaron un monto estimado de USD 40 000 millones. Pakistán se encuentra entre los últimos tres lugares del *ranking* de países del Índice Global de Brecha de Género, lo que implica padecer consecuencias graves cuando los desastres climáticos ocurren: no solo hay más bajas de mujeres, sino que también se ven forzadas a migrar luego del desastre climático. Esto constituye una disrupción significativa tanto para mujeres como para niñas, y aumenta las limitaciones que enfrentan en relación a la movilidad, el acceso a la educación y la autonomía económica.¹⁰⁴

Antes de las inundaciones, Pakistán redujo su gasto climático en, al menos, un 25% entre los AF 2021 y 2022, producto de acciones que se llevaron a cabo para garantizar los préstamos del FMI. Además, en simultáneo con las inundaciones, los programas del FMI disminuyeron el poder de compra de los consumidores y redujeron el gasto público en un momento en el que la gente más lo necesitaba.¹⁰⁵ Los rescates financieros del FMI exacerbaron los peores efectos del cambio climático y socavaron la recuperación de las personas más marginadas, ya que el monto de los rescates sumaban sólo una fracción del total de los daños en Pakistán, del cual una porción significativa estaba destinada al pago de la deuda.¹⁰⁶ En el medio de la crisis, activistas e intelectuales paquistaníes han demandado justicia climática mediante reparaciones de la deuda, dado que el subdesarrollo del país sienta sus bases en una historia de explotación como colonia británica, dando origen al subsiguiente dominio absoluto de ajuste estructural, y a la deuda contraída por gobernantes inimputables.¹⁰⁷

NUEVAS INCURSIONES ENTRE GÉNERO Y CLIMA

La nueva Estrategia de Género del Banco Mundial para 2023-2030 intenta establecer un nuevo foco sobre el cuidado y la protección social dentro del enfoque del Banco en pos de la reducción de la pobreza y el crecimiento inclusivo.¹⁰⁸ Esto ha suscitado muchas críticas,¹⁰⁹ principalmente porque la Estrategia no considera el propio impacto de género del rol del Banco Mundial en el financiamiento de políticas de desarrollo, inclusive tampoco lo considera en sus propias recomendaciones sobre consolidación fiscal y préstamos enfocados en impuestos regresivos. También suele reducir a las mujeres a «fuentes de recursos sin explotar».¹¹⁰

De forma similar, la Estrategia de Género del FMI publicada en 2022 no aborda los impactos dañinos de sus políticas macroeconómicas, ni las causas de origen de la desigualdad de género. En su lugar, opta por un enfoque

¹⁰⁴ Advancing Learning and Innovation on Gender Norms (ALIGN), [What do we mean by 'there's no climate justice without gender justice'?](#), 2022.

¹⁰⁵ Alliance for Climate Justice and Clean Energy, [Alternative Law Collective, & Recourse, How are the IMF and the World Bank shaping climate policy? Lessons from Pakistan](#), 2023.

¹⁰⁶ Peoples Dispatch, ['The ax always falls on the most vulnerable': Pakistan demands debt cancellation and climate justice](#), 2022.

¹⁰⁷ Equal Times, [After calamitous floods, Pakistan makes a compelling case for climate reparations](#), 2022.

¹⁰⁸ World Bank, [World Bank Gender Strategy 2024-2030](#), 2023.

¹⁰⁹ Bretton Woods Project, [World Bank's new gender strategy: Concerns about approach to social protection and gender-blind macroeconomic reforms remain](#), 2022; Bretton Woods Project, [Spring Meetings 2023 Wrap Up: Bretton Woods Institutions fail to deliver a transformative evolution](#), 2023.

¹¹⁰ Bretton Woods Project, [Spring Meetings 2023 Wrap Up: Bretton Woods Institutions fail to deliver a transformative 'evolution'](#), 2023

empresarialmente amigable para el «empoderamiento» de las mujeres. En una carta abierta que se le envió al FMI en 2022, un grupo de 178 organizaciones feministas y 124 personas rechazaron su Estrategia de Género y denunciaron la historia nociva del FMI de consolidación fiscal y ajuste estructural, y argumentaron sobre cómo esta historia ha sido antiética para lograr la igualdad de género.¹¹¹

La Hoja de Ruta para la Evolución del Banco Mundial es la iteración más reciente de su visión y estrategia a largo plazo, sin embargo, en lugar de abordar las reformas de gobernanza que resultan muy necesarias, parece que solo reafirma que todo sigue igual. La Hoja de Ruta ha suscitado muchas críticas por su énfasis en capitales en busca de rentabilidad y en la dependencia en los procesos extractivos de norte a sur y, a su vez, también se lo criticó por omitir cualquier tipo de reconocimiento sobre el déficit democrático en la gobernanza económica mundial. Esta Hoja de Ruta también reafirma el principio de cascada del Banco, que se basa en la premisa de incentivar y movilizar el sector privado y la financiación comercial hacia el desarrollo.¹¹²

Como parte de la nueva sensibilidad al cambio climático, el FMI estableció el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS) en el 2022, lo cual constituye una nueva fuente de préstamos financiada por DEG no utilizados destinados a los PEID y países climáticamente vulnerables. **Desde abril del 2023, el FFRS era titular de aproximadamente USD 40 000 millones en DEG, lo que continuaba siendo una simple fracción de los DEG que poseían los países de altos ingresos.**¹¹³ Como un fondo fiduciario a base de préstamos, el FFRS aumentará la deuda de los países prestatarios. Además, el acceso de los países a los préstamos del FFRS está sujeto a que los países sean parte de otro programa de préstamos «tradicional» del FMI que incluya el típico conjunto de condicionalidades adjuntas e impactos austeros. La falta de una cancelación de la deuda adecuada genera una gran posibilidad de que los préstamos del FFRS solo se utilicen para el pago de las deudas existentes.¹¹⁴

En grandes rasgos, la presión cada vez mayor que ejercen las BWI para posicionarse como actores clave en el financiamiento climático socava aún más la necesidad de una transición justa y democrática. **El Banco Mundial ha invertido USD 15 000 millones para apoyar los proyectos y las políticas relacionadas con los combustibles fósiles desde el Acuerdo de París.**¹¹⁵ Solo en 2022, se estima que USD 3 700 millones de financiamiento comercial del Banco Mundial se destinó al gas y el petróleo.¹¹⁶ Cambiar el espacio más democrático de la ONU, como lo es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde se encuentra el poder de la toma de decisiones sobre el financiamiento climático, y, en su lugar, designar como hogar de este poder el espacio antidemocrático del FMI y el Banco Mundial sería un movimiento regresivo, ya que aumentaría las posibilidades de financiamiento basado en préstamos y la falta de alineación con el Acuerdo de París.¹¹⁷

¹¹¹ Civil society joint statement, [Feminists Reject International Monetary Fund's Strategy Toward Mainstreaming Gender #NotInOurName](#), 2022.

¹¹² Civil society joint statement, [Civil Society calls for rethink of World Bank's Evolution Roadmap as part of wider reforms to highly unequal global financial architecture](#), 2023.

¹¹³ Reuters, [IMF's Georgieva says 44 countries interested in new resilience trust loans](#), 2023.

¹¹⁴ Debt Justice and CAN International, [The debt and climate crises: Why climate justice must include debt justice](#), 2022.

¹¹⁵ ActionAid, [The Vicious Cycle: Connections between the debt crisis and climate crisis](#), 2023.

¹¹⁶ Urgewald, [Is the World Bank giving billions of trade finance to fossil fuels?](#), 2023.

¹¹⁷ ActionAid, [The Vicious Cycle: Connections between the debt crisis and climate crisis](#), 2023.

Hacia una Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo

El proceso del Financiamiento para el Desarrollo de las Naciones Unidas (FpD) se mantiene como el foro más legítimo y democrático de la gobernanza económica mundial. Sigue la lógica del dictamen de la Asamblea General de las Naciones Unidas de «un país, un voto», e incluye la participación de integrantes de la sociedad civil en carácter de observador/a. Luego de 20 años de comenzado el proceso del FpD, el mundo enfrenta una crisis climática y una crisis de costo de vida, como así también nuevas olas de austeridad y niveles de desigualdad al alza. A raíz de estas situaciones, se destaca aún más el papel esencial que el proceso del FpD debería jugar en la gobernanza económica mundial. La reciente decisión de considerar convocar una cuarta cumbre del FpD en 2025 a nivel de jefes de estado ofrece una gran oportunidad de volver a centrar la gobernanza económica mundial en las Naciones Unidas, en lugar de hacerlo en espacios antidemocráticos como las BWI.

Idealmente, la Cuarta Conferencia del FpD debería movilizar a los gobiernos para que finalmente pongan en práctica demandas que se sostienen desde hace mucho tiempo para la creación de nuevas entidades de la ONU que aborden temas como la tributación y la deuda. La sociedad civil debe jugar un papel activo para ejercer presión con el objetivo de que se lleve a cabo una cuarta FpD y para que tengan lugar resultados que garanticen más poder de toma de decisiones a los gobiernos del sur global y, de esta forma, les permitan crear caminos hacia la justicia climática y económica.

➔ **En general, mientras se debate mucho sobre el papel protagónico que juegan las BWI en la gobernanza económica mundial, muy poco se hace para transformar esta estructura. No habrá una reforma significativa del rol de las BWI en la gobernanza económica mundial si el FMI no aumenta drásticamente la proporción de las cuotas designadas al sur global. Si no hay cambios claves en la gobernanza económica mundial, las BWI solo seguirán por el camino de las condicionalidades y los préstamos predatorios, pese a que sostienen una fachada de un intento de reforma a través de estrategias y prácticas de género, como son los pisos de gasto social del FMI. El FMI y el Banco Mundial no pueden desempeñarse como agentes de promoción de la justicia económica, climática y de género mientras no cuestionen los daños que causan sus propias intervenciones. En lugar de intentar expandir sus mandatos en los ámbitos de género y clima, las BWI primero deben reconocer cómo las políticas de asesoramiento y las condicionalidades de sus préstamos socavan el rol del estado y de la capacidad del sistema multilateral de permitirles proteger tanto los servicios como los bienes públicos.¹¹⁸**

¹¹⁸ ActionAid, [The Care Contradiction: The IMF, Gender, and Austerity](#), 2022.

V. COMERCIO

Los patrones globales de comercio e inversión históricamente se han beneficiado de la explotación del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y, a su vez, han hecho oídos sordos a los impactos diferenciados por el género de las políticas de comercio. La gobernanza del comercio mantiene un enfoque en silos y neoliberal hacia los derechos humanos de las mujeres en un sistema que a lo largo de la historia ha priorizado los intereses, las ganancias, y los derechos de las grandes empresas y los países ricos.

DENTRO Y FUERA DE LA OMC: TRANSFORMACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL COMERCIO MUNDIAL

En los últimos años, los vínculos entre género y comercio se han popularizado cada vez más debido a la retórica y a la inclusión de políticas y capítulos de género en tratados de libre comercio multilaterales y regionales. En 2017, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio lugar a una Declaración conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres que no reconoce el propio rol de la organización en la profundización de las desigualdades, por ejemplo, a través de las incesantes políticas de liberalización, privatización y desregulación.¹¹⁹ En su lugar, se utilizó para exhibir nuevas temáticas de las agenda de la OMC que se centraban en cómo se podían integrar las mujeres en las cadenas de valores globales para el «empoderamiento» económico.¹²⁰

La gobernanza del comercio sirve como espejo a gran escala de la negligencia de la OMC por no reconocer que la liberalización, con frecuencia, facilita los daños en el sur global. **Las normas de comercio multilaterales de la OMC están cada vez más saturadas por la afluencia de tratados comerciales firmados y negociados por fuera de la OMC.** Entre ellos se encuentra el Acuerdo de Asociación Mercosur - Unión Europea, el cual finalizó recientemente, el Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA), el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que ya se encuentra vigente, y el Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEP), publicado recientemente.¹²¹ La mayoría de estos acuerdos sobrepasan las normas de comercio de la OMC y es probable que causen más perjuicios de los que ya existen, ya que limitan significativamente el espacio de los países en desarrollo para que promulguen cambios en las políticas de las áreas gobernadas por estos acuerdos.

El AfCFTA ilustra los perjuicios de la nueva generación de acuerdos comerciales. El AfCFTA entró en vigencia en enero del 2021, y estipula que sus miembros, entre los que se incluyen la mayoría de los países del continente africano, acuerdan eliminar las tarifas en la mayoría de bienes y servicios por los próximos 5 a 13 años para fomentar la integración económica de África. Esta liberalización tan rápida y agresiva impulsará pérdidas significativas en el ingreso fiscal público, lo que puede dar pie a más recortes en las prestaciones de servicios públicos y puede impulsar aumentos en los impuestos regresivos sobre bienes de consumo básico.¹²²

Una de las características más significativas de estos acuerdos comerciales nuevos es que van más allá de los «antiguos» temas comerciales tales como tarifas, bienes, servicios, inversión, derechos de propiedad intelectual (DPI), e incluyen nuevas temáticas y áreas que no están ni remotamente relacionadas con el comercio. Los

¹¹⁹ Asia Pacific Forum on Women Law, and Development, [Statement: Women's Rights Groups Call on Governments to Reject WTO Declaration on Women's Economic Empowerment](#), 2017.

¹²⁰ ActionAid, [From Rhetoric to Rights: Towards Gender-Just Trade](#), 2018.

¹²¹ FEMNET, [The African Continental Free Trade Area \(AfCFTA\) and Women: A Pan African Feminist Analysis](#), 2021; House of Commons Library, [The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership \(CPTPP\)](#), 2023.

¹²² FEMNET, [The African Continental Free Trade Area \(AfCFTA\) and Women: A Pan African Feminist Analysis](#), 2021.

nuevos temas varían desde la economía digital, la adquisición gubernamental y los subsidios a pequeños pescadores, hasta iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria.¹²³ **Las reglas que gobiernan estas nuevas problemáticas limitan una a una las capacidades de los países en desarrollo de poder promulgar políticas para el desarrollo, de regular las EMN y de administrar la crisis.** Esto ocurre así cuando los compromisos comerciales ejercen presión sobre los países en desarrollo para eliminar subsidios y tarifas que son fundamentales para su desarrollo. Este acontecimiento se da a pesar de que, a los países desarrollados, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, se les ha permitido proteger sus economías a través del control sobre su tecnología y sus barreras arancelarias y no arancelarias.¹²⁴

Los desafíos al régimen actual de los DPI se potenciaron en respuesta a la pandemia del COVID-19, y tanto los países del sur global como las personas activistas, inclusive los colectivos feministas, les dieron forma de demandas clave.¹²⁵ En junio del 2022, la OMC finalmente aprobó una exención que implicaba una renuncia a ejercer protecciones de propiedad intelectual sobre las patentes de las vacunas de COVID-19 que ya se encontraba establecida previamente conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).¹²⁶ La propuesta original de esta renuncia de los ADPIC la presentaron India y Sudáfrica en el 2020 ante la OMC y la bloquearon Estados Unidos y la Unión Europea. La renuncia a ejercer los derechos de los ADPIC que se terminó aprobando era una versión diluida de la propuesta original, es un típico caso de mucho ruido y pocas nueces y, encima, demasiado tarde. Sin embargo, ya antes de la pandemia, muchos países del sur global y activistas feministas de la sociedad civil creían que los desafíos que suponía el régimen de propiedad intelectual no se tomaban en serio, por lo que, en consecuencia, se hacía evidente que una renuncia a ejercer los derechos de los ADPIC, aunque no sea suficiente, era un paso necesario para cuestionar el régimen actual.¹²⁷

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS

Uno de los principales límites de la captura corporativa en el ámbito comercial y de inversión que sigue sin abordarse es la persistente inclusión de mecanismos de protección al inversionista en los acuerdos comerciales y de inversión. La principal causa de esto es el mecanismo de arbitraje y conciliación de diferencias entre inversionistas y Estados (ADIE), que históricamente le ha otorgado poderes sin ningún tipo de control a las EMN para demandar a los gobiernos por miles de millones de dólares en caso de sospechar que alguna medida puede dañar sus márgenes de ganancia o de inversión.¹²⁸ En los últimos años, la injusticia, el secretismo, y los costos de los casos de ADIE han suscitado cada vez más conciencia pública y oposición hacia el mecanismo. Producto de esta situación, la Unión Europea intentó renovar la imagen de los mecanismos de ADIE y así poder ponerle una careta más amigable al lote de poder corporativo.¹²⁹ Esta renovación de imagen solo aborda algunos de los peores problemas procesales de dicho régimen, mientras que mantiene intacta la injusticia intrínseca.¹³⁰

¹²³ Third World Network, [How 'Digital Trade' Rules Would Impede Taxation of the Digitalised Economy in the Global South](#), 2020; Gender & Trade Coalition, [Open Letter from the Gender and Trade Coalition to the Director-General and Honorable Delegates of the World Trade Organisation \(WTO\) ahead of MC12](#), 2022.

¹²⁴ Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) and Third World Network, [International Trade & Investment Rules, Intellectual Property Rights and COVID-19: A perspective from the South](#), 2021.

¹²⁵ Feminists for a People's Vaccine, [International Trade & Investment Rules, Intellectual Property Rights and Covid-19: A Perspective From the South](#), 2021 and [TRIPS Waiver Proposal - An Ongoing Debate](#), 2021; Feminist COVID-19 Collective, [Another World is Possible: A Feminist Monitoring & Advocacy Toolkit for Our Feminist Future](#), 2020.

¹²⁶ World Trade Organization, [Draft Ministerial Decision on the TRIPS Agreement](#), 2022.

¹²⁷ Third World Network, [A global intellectual property waiver is still needed to address the inequities of COVID-19 and future pandemic preparedness](#), 2022.

¹²⁸ Feminist Action Nexus for Economic and Climate Justice, [A Feminist Agenda for People and Planet: Principles and Recommendations for a Global Feminist Economic Justice Agenda](#), 2021.

¹²⁹ European Commission, [Multilateral Investment Court project](#), n.d.

¹³⁰ Public Services International (PSI), [The Multilateral Investment Court: The Wolf's Newest Outfit](#), n.d.

Si bien parece que la cantidad de reclamos hacia el régimen de ADIE están disminuyendo, hay una posibilidad real de que la industria de los combustibles fósiles intensifique litigios conforme al ADIE para inducir al congelamiento regulatorio transfronterizo y generar pagos por activos varados.¹³¹ A pesar de que la mayoría de estos reclamos no terminan en pagos para los demandantes, sí generan costos para los gobiernos que buscan llevar a cabo acciones políticas que amenazan a las EMN.¹³² Mientras los estados sigan en la búsqueda de llevar a cabo acciones climáticas y desarrollar otras políticas nacionales, se arriesgan a incitar más arbitraje por parte de las empresas de combustibles fósiles.

Hasta el día de la fecha, las empresas de combustibles fósiles han hecho uso excesivo del ADIE, y lo seguirán haciendo cada vez más mientras que activos como plantas de carbón de propiedad extranjera, gasoductos, o incluso permisos de exploración, sigan estando protegidos por acuerdos internacionales de inversión (AI). **Cerca de un 20% de los casos reconocidos de ADIE están vinculados al sector de inversión de los combustibles fósiles, de los cuáles dos tercios de ellos los ganan los inversionistas.**¹³³ Hasta el día de la fecha, **7 de los 10 mayores fallos de arbitraje de inversión involucraron a empresas de combustibles fósiles (en un rango de USD 1 600 a USD 40 000 millones).** Por lo que, cuando estos inversionistas ganan, resulta muy costoso para los contribuyentes y los gobiernos.¹³⁴

MÁS DE LA MITAD DE LOS MAYORES FALLOS DE LOS ADIE HAN RESULTADO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES*

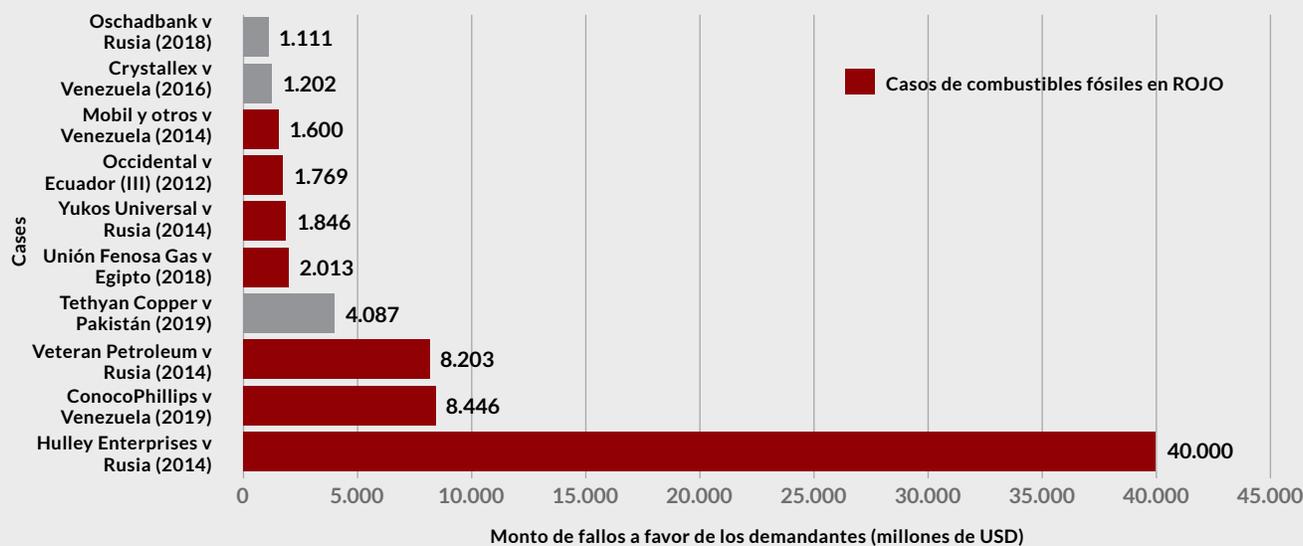


Figura 5.1: Top diez de los mayores fallos a favor de los demandantes a través del ADIE (Global Legal Group, 2022).

UNA NUEVA ERA DE EXTRACTIVISMO VERDE

El aumento de demanda de energía limpia y vehículos eléctricos hace que las economías orientadas a la exportación del sur global tengan un apetito cada vez mayor por extraer y exportar materia prima como litio, cobalto y níquel. Estos minerales constituyen componentes esenciales de baterías y otras tecnologías verdes.

El Banco Mundial anticipa que para el 2050 la demanda por minerales esenciales de transición puede aumentar un 500%, aproximadamente.¹³⁵

¹³¹ Tienhaara, [Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement](#), 2017.

¹³² UN Conference on Trade and Development, [Investment Dispute Settlement Navigator](#), 2022.

¹³³ International institute for sustainable development, [Investor-State Disputes in the Fossil Fuel Industry](#), (2021).

¹³⁴ Global Legal Group, [International Comparative Legal Guides: Investor-State Arbitration 2022](#), 2022.

¹³⁵ World Bank Group, [Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition](#), 2020.

A pesar de la conciencia global cada vez mayor sobre los costos socio ecológicos del extractivismo, los minerales esenciales de transición, como el litio, se posicionan cada vez más como ambientalmente benignos, y los países del sur se ven incentivados a orientar sus exportaciones en base a esos minerales.¹³⁶ **En países ricos en recursos, con abundantes cantidades de litio, como Argentina, Bolivia y Chile (apodados como el «Triángulo de Litio»), la expansión de este mineral probablemente impulsará el desposeimiento de la población local y aumentará las tensiones debido a los conflictos de recursos, en particular, debido a que más del 80% de los proyectos de litio se ubican en territorio indígenas.**¹³⁷



UBICACIÓN DE LUCHA LOCAL

Foto: Licadho

Acción con perspectiva de género en la industria de la confección orientada a la exportación en Camboya

Desde la década de 1990, la estrategia de crecimiento orientada a la exportación en Camboya ha facilitado la expansión de la industria de la confección dominada por trabajadoras mujeres. Haciéndole frente a alternativas limitadas, las mujeres trabajan bajo condiciones notoriamente explotadoras de la industria de la confección y, con frecuencia, se las contrata a raíz de la percepción que se tiene sobre su sumisión, su voluntad de trabajar por salarios más bajos y su conocimiento limitado sobre derechos laborales.¹³⁸

Incluso en medio de un clima hostil fomentado por el gobierno del país, las mujeres trabajadoras de la industria de la confección abogan persistentemente por sus derechos. En el 2014, miles de mujeres trabajadoras de este rubro marcharon para protestar y denunciar la paga inadecuada y las condiciones laborales inhumanas. Debido a la agresión policial con la que se encontraron, la protesta culminó con la muerte de al menos cuatro hombres sindicalistas y dejó 40 personas heridas. Para el 2015, el gobierno promulgó leyes que imponían requisitos rigurosos para el registro de líderes de sindicatos y para sus miembros.

A pesar de los desafíos, esta acción liderada por mujeres ha logrado sumar algunos triunfos notables en su haber. Algunas de las victorias significativas incluyen un aumento en el salario mínimo y la estipulación de límites en las tarifas de alquiler de habitaciones para trabajadoras, luego de denunciar la imposición de tarifas exorbitantes a los alquileres por parte de las personas propietarias.¹³⁹

¹³⁶ Voskoboynik & Andreucci, [Greening extractivism: Environmental discourses and resource governance in the 'Lithium Triangle'](#), 2021.

¹³⁷ Institute of Development Studies, [Bringing Democracy to Governance of Mining for a Just Energy Transition](#), 2023; Voskoboynik & Andreucci, [Greening extractivism: Environmental discourses and resource governance in the 'Lithium Triangle'](#), 2021.

¹³⁸ El Nexo de Acción publicará a fines del 2023 una discusión sobre el impacto de las políticas macroeconómicas sobre la labor de las mujeres, realizada por la economista feminista Diksha Arora.

¹³⁹ ActionAid, [Double Jeopardy: Violence Against Women and Economic Inequality](#), 2017.

➔ **En general, la expansión de los aspectos y áreas de comercio, es decir las reglas que implican «más allá del comercio», junto con la combinación de las normativas comerciales y la proliferación de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, sólo se contribuye al daño y a la desigualdad ya existentes producto del sistema comercial actual. Las nuevas iniciativas comerciales y de seguridad alimentaria no ofrecen a los países en desarrollo el espacio para la implementación de políticas nacionales que busquen aumentar y diversificar la producción y así satisfacer las necesidades domésticas. La renovación de imagen del ADIE, junto con los acuerdos comerciales a los que el sur global sigue estando sujeto a través de la instrumentalización de género y que resultan perjudiciales, continúa moldeando las economías de los países en desarrollo con base en estrategias de crecimiento orientadas a la exportación, y cada vez más en nombre del extractivismo verde. Como consecuencia, el régimen del comercio sigue funcionando de la misma forma, pero con una careta de perspectiva de género.**

VI. CAPTURA CORPORATIVA

Existe una tendencia ascendente hacia el *multistakeholderismo* (participación de múltiples partes interesadas) en la gobernanza económica mundial, esto les ha otorgado a las empresas multinacionales (EMN) una influencia abrumadora en el desarrollo de políticas, la creación de estándares, y la distribución de los bienes públicos. Mientras que el sistema de gobernanza multilateral se centra en los gobiernos, el *multistakeholderismo* invita a un grupo de partes interesadas a formar parte de la gobernanza mundial, y al mismo tiempo inclina la balanza en favor de las EMN.¹⁴⁰ El *multistakeholderismo* se está convirtiendo en el modo predeterminado de toma de decisiones sobre asuntos globales, incluso invitan a actores corporativos a participar de ella, aún hasta en la ONU. Esto socava su legitimidad como una institución fundada sobre los principios de los derechos humanos.

CAPTURA CORPORATIVA EN LA ONU

Si bien las sociedades de la ONU con sectores privados no es nada nuevo, se están promoviendo a niveles nunca antes vistos. Un claro ejemplo se puede encontrar en el informe Nuestra Agenda Común, publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en el 2021, el cual tiene como objetivo acelerar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al aumentar el compromiso en los procesos multilaterales de las múltiples partes interesadas.¹⁴¹ *Nuestra Agenda Común* fomenta nuevos enfoques de múltiples partes interesadas bajo el titular de «multilateralismo efectivo, conectado, e inclusivo». En teoría, esto se refiere a la ampliación de los procesos intergubernamentales para incluir a asociaciones empresariales, fundaciones filantrópicas privadas, sociedades civiles, y el ámbito académico. La agenda no brinda una definición clara de cómo funcionaría esto en la práctica y tampoco presenta un análisis de su efectividad ni de los intereses privados que, a lo largo de la historia, siempre han sido privilegiados en los espacios de *multistakeholderismo*.¹⁴²

La comunidad empresarial internacional le ha dado una efusiva bienvenida a la noción de «inclusividad» para incorporar los intereses del sector privado en la toma de decisiones internacional. Esta influencia ha sido evidente en la capacidad de las empresas privadas de debilitar el potencial de los procesos regulatorios. Por ejemplo, el sector privado ejerció presión para que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siendo menos rigurosos, tomen precedencia por sobre la propuesta más estricta de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales en relación a los Derechos Humanos.¹⁴³

¹⁴⁰ Transnational Institute (TNI), [Multistakeholderism: a critical look](#), 2019.

¹⁴¹ United Nations Secretary General, [Our Common Agenda – Report of the Secretary General](#), 2021.

¹⁴² Foundation for Global Governance and Sustainability, [Global Governance and ‘Our Common Agenda’: A Critical Review](#), 2021.

¹⁴³ DAWN, [Corporate Accountability and Women’s Human Rights: an Analytical Approach to Public-Private Partnerships \(PPPs\)](#), 2021.

La sociedad propuesta entre BlackRock y ONU Mujeres fue una demostración particularmente atroz del rol cada vez más imponente de la financiación privada en los espacios de la ONU. En mayo de 2022, en el Foro Económico Mundial en Davos, ONU Mujeres anunció la asociación con BlackRock, la firma inversionista más grande del mundo, para promover el crecimiento de la inversión con perspectiva de género.¹⁴⁴ BlackRock es una de las mayores firmas inversoras del mundo de las empresas de combustibles fósiles más nocivas y es una de las mayores titulares reconocidas de deudas externas privadas del sur global, por lo cual se la conoce por haber negado solicitudes de reestructuración de la deuda para generar más remuneración mediante los pagos. La asociación se canceló rápidamente luego de la presión de la sociedad civil feminista.¹⁴⁵ Sin embargo, es desconcertante que ONU Mujeres no haya compartido la intención de involucrarse en dicha sociedad, dado que los Memorándum de Entendimiento (MdE) secretos son una marca distintiva del mundo del comercio, donde el objetivo es proteger la ventaja competitiva (un mandato completamente opuesto a los valores y el propósito de la ONU).

Dichas asociaciones también son parte de una tendencia reciente y más amplia sobre el desarrollo de la captura corporativa a través del impacto de la inversión, lo que constituye una solución falsa de financiamiento de los ODS, respaldada cada vez más por la ONU. En el 2021, ONU Mujeres se asoció con la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, según sus siglas en inglés) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del financiamiento privado del Banco Mundial, para publicar «Bonos para cerrar la brecha de género: guía práctica para utilizar deuda sostenible para lograr la igualdad de género» (*Bonds to Bridge the Gender Gap: A Practitioner's Guide to Using Sustainable Debt for Gender Equality*).¹⁴⁶ Este apoyo es particularmente preocupante, dado que mucho del dinero dirigido a través de la inversión en los impactos de género proceden de dinero público que subsidia inversiones privadas, es decir que los actores privados se benefician de los aranceles y, al mismo tiempo, prácticamente no corren ningún riesgo. Todo esto ocurre mientras se extraen fondos públicos que deberían dirigirse a bienes y servicios públicos.¹⁴⁷

La presencia corporativa en la CMNUCC, especialmente en la COP27 y en la COP28, también evidencia la invasión del *multistakeholderismo* y la captura corporativa en las políticas climáticas. **Al menos 2456 lobistas de los combustibles fósiles asistieron a la conferencia climática de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que representó un número casi cuatro veces mayor que aquellos que asistieron a la COP27 y superando ampliamente la cantidad de personas delegadas registradas de cualquier país a excepción de Brasil y los EAU.**¹⁴⁸ La participación récord de la industria de combustibles fósiles en la COP27 no es sorpresa para nadie dado que la presidencia es liderada por el CEO de una de las petroleras más grandes de los EAU. Si bien la ONU estipuló recientemente que los lobistas de los combustibles fósiles deben, al menos, identificarse como tales en la COP28 (a raíz de la repercusión negativa que tuvo su gran participación en la COP27), dicha medida no influye mucho a favor de la desarticulación del poder de los intereses de la industria de los combustibles fósiles sobre el establecimiento de las agendas en espacios supuestamente democráticos.¹⁴⁹

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ Association for Women's Rights in Development (AWID), [Feminists Demand End of UN Women's Partnership With Blackrock](#), Inc., 2022.

¹⁴⁶ ICMA, IFC, & UN Women, [Bonds to Bridge the Gender Gap: A Practitioner's Guide to Using Sustainable Debt for Gender Equality](#), 2021.

¹⁴⁷ AWID, [Gender Impact Investing & the Rise of False Solutions: An analysis for feminist movements](#), 2023.

¹⁴⁸ Kick Big Polluters Out, [Release: Record number of fossil fuel lobbyists at COP28](#), 2023.

¹⁴⁹ The Guardian, [So what if fossil fuel lobbyists have to declare themselves at Cop28? That won't curb their power](#), 2023.

MÁS DE CUATRO VECES MÁS LOBISTAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES REGISTRADOS EN LA COP28 QUE EN LA COP27

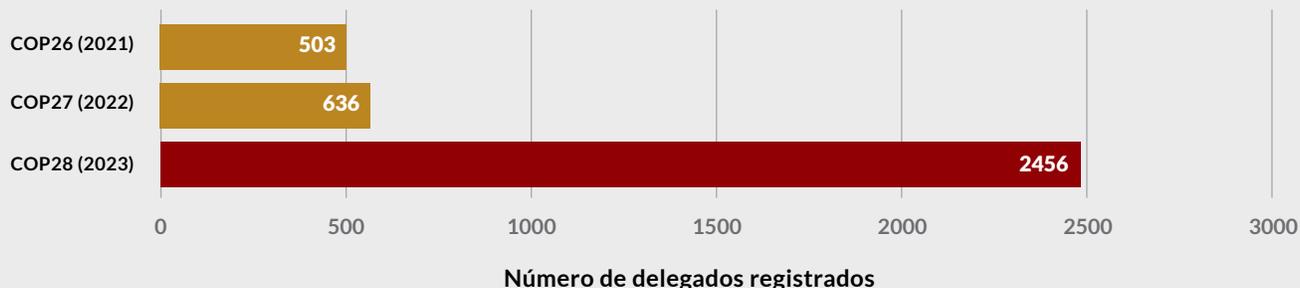


Figura 6.1: Comparación de los lobistas de los combustibles fósiles registrados en las tres COP más recientes versus la COP27 (CMNUCC, 2022 y KBPO, 2023).

La captura corporativa también influyó en la producción y la distribución de las vacunas durante la pandemia del COVID-19. Un ejemplo clave es COVAX, una iniciativa de múltiples partes interesadas con el objetivo de garantizar el acceso global igualitario a las vacunas, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); GAVI, la Alianza para las Vacunas; y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias. Al enfocarse completamente en la distribución de las vacunas, COVAX ocultó la necesidad de soluciones que aborden la raíz del problema, inclusive la renuncia de ejercer los derechos de propiedad intelectual y ampliar la transferencia de tecnologías para fabricantes en el sur global. Este mecanismo también fue foco de críticas por su falta de transparencia en contratos con farmacéuticas.¹⁵⁰

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: LA CAPTURA CORPORATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La tendencia más instalada sobre la gobernanza global de la captura corporativa va de la mano con la instalación generalizada de la visión de las asociaciones público-privada (APP) como vehículos de desarrollo. Tanto el *multistakeholderismo* como las APP restringen el rol del Estado, dejan la responsabilidad en manos de la ciudadanía, e invitan a la explotación corporativa. Por lo general, las mujeres se llevan la peor parte de estas negligencias porque es más probable que tengan trabajos precarizados y con salarios bajos, que no tengan protección social y que enfrenten mayores barreras para conseguir oportunidades económicas.¹⁵¹

En el ámbito del desarrollo, los gobiernos y los actores multilaterales consideran cada vez más las APP como un medio legítimo para involucrar el sector privado en el financiamiento de infraestructura y de servicios públicos. Implican contratos a largo plazo en donde las corporaciones privadas tienen permitido construir y llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura que convencionalmente lo hacen los Estados. Desde la adopción de los ODS en el 2015, actores con influencia como el Banco Mundial, Agencias de la ONU, y bancos de desarrollo multilaterales y regionales han fomentado las APP para cerrar la tan conocida «brecha de financiamiento» para el desarrollo en el sur global. Si bien es difícil encontrar datos confiables sobre el volumen total de APP, en general, las figuras parecen indicar que las inversiones en APP en el sur global han sido volátiles, con un pico en el 2012 y con un declive pronunciado durante la pandemia, pero en recuperación desde el 2021 en adelante.¹⁵²

¹⁵⁰ Transnational Institute, [The Three COVID Crises and Multistakeholderism: Impacts on the Global South](#), 2022.

¹⁵¹ Eurodad, GADN, and FEMNET, [Can public-private partnerships deliver gender equality?](#), 2019.

¹⁵² Eurodad, [History RePPeated II: Why Public-Private Partnerships are not the Solution](#), 2022.

La evidencia demuestra claramente que las APP exacerban las desigualdades sociales y de género, tercerizan y privatizan los servicios públicos que son esenciales para las mujeres o que los utilizan en mayor medida. En estos servicios se incluyen la salud, la educación, el transporte, la energía, el agua, y la sanitización. Por lo tanto, limitan el acceso de las mujeres a los servicios sociales porque aumenta el costo, por lo general, mediante la aplicación de impuestos al consumidor. A diferencia de los gobiernos, los proveedores privados responden a las partes interesadas y no a los ciudadanos, lo que hace que sean menos transparentes y que sea menos probable que hagan un trabajo íntegro para las mujeres.¹⁵³ A pesar de ofrecer servicios más caros, menos transparentes y con menos perspectiva de género, las APP permiten a los actores privados obtener una rentabilidad significativa con muy poco riesgo, dado que tienden a estar respaldados por garantías soberanas de los estados.¹⁵⁴



UBICACIÓN DE LUCHA LOCAL

Foto: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Impactos con perspectiva de género de las APP y resistencia a las APP en México

El gobierno mexicano ha ostentado el plan del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), operado por varias APP, como un «modelo de desarrollo» nuevo y laudable, pese a ser criticado por las comunidades debido a los serios impactos negativos sociales y medioambientales que genera. El plan involucra conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico mediante la construcción de cuatro autopistas y una vía ferroviaria modernizada, con zonas económicas libres ensambladas a lo largo del corredor para incentivar la inversión privada.

Las comunidades han denunciado el plan del CIIT por destruir las formas de vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la región del Istmo y por otorgarles un poder desmedido a actores privados sobre lo que, supuestamente, son recursos naturales públicos. Las zonas industrializadas, que tienden a suscitar una presencia significativa de crimen organizado, históricamente han puesto en peligro particularmente a las mujeres y se teme que los planes de industrialización del CIIT serán una invitación para que en el corredor tenga lugar la misma violencia de género y la misma inseguridad laboral. En este contexto, las mujeres han estado a la cabeza de las protestas en contra del CIIT con el objetivo de luchar por la soberanía sobre su territorio y por el control de su sustento. Las mujeres indígenas están liderando demandas por un modelo de desarrollo alternativo, que consagre los principios del bienestar colectivo, el derecho a los bienes públicos y la conexión con la naturaleza.¹⁵⁵

¹⁵³ Eurodad, GADN, and FEMNET, [Can public-private partnerships deliver gender equality?](#), 2019.

¹⁵⁴ DAWN, [Corporate Accountability and Women's Human Rights: an Analytical Approach to Public-Private Partnerships \(PPPs\)](#), 2021.

¹⁵⁵ Eurodad, [History RePPeated II: Why Public-Private Partnerships are not the Solution](#), 2022.

➔ *En general, parece que la primacía de la captura corporativa sobre la gobernanza económica mundial y sobre el desarrollo tiene un ingente potencial de aceleración a lo largo de las próximas décadas si no se la desafía, por lo cual es aún más importante que las sociedades civiles estén a la cabeza de la defensa en contra de esta situación. La institucionalización de la agenda de múltiples partes interesadas está erosionando los espacios multilaterales para la colaboración intergubernamental y está tercerizando a actores privados la prestación de servicios públicos y de desarrollo. El afianzamiento del modelo de multistakeholderismo a la altura de la ONU, como se ejemplifica en Nuestra Agenda Común, es la prueba irrefutable de esto.*

VII. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

Las mujeres y las personas de género diverso están a la cabeza de la crisis climática, esto hace que tanto el financiamiento climático como el financiamiento de desarrollo relacionado con el clima sean esenciales para alcanzar una justicia climática, económica y feminista. Al mismo tiempo, en general, las mujeres son responsables de los trabajos de cuidado, los cuales serán más difíciles de llevar a cabo debido al avance de la crisis climática. El acceso desigual a los recursos y la toma de decisiones exacerban cada una de estas dificultades.¹⁵⁶

¿HACIA UN FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?

La transversalización de la perspectiva de género en los fondos climáticos multilaterales ha variado en fuerza y operatividad. Los cuatro principales fondos climáticos multilaterales, es decir el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo Verde del Clima, y los Fondos de Inversión en el Clima, han desarrollado o actualizado políticas de género o de igualdad de género para promover la consideración del mismo en sus operaciones y sus proyectos de respaldo.¹⁵⁷

Entre todos los proyectos de financiamiento para el desarrollo que los países desarrollados informaron a la OCDE, y considerados como relacionados con el clima, las últimas versiones de los informes sobre género indican que son inconsistentes e incompletos. **Solo el 2,9% de los proyectos de financiamiento para el desarrollo relacionados con el clima en el 2020 identificaron la igualdad de género como un objetivo principal. Alrededor de 1 de cada 2 (45,7%) no marcaron si el género se consideraba o no, es decir que el marcador de género no fue utilizado por el 80% de los proyectos de los BMD y por el 96% de los proyectos llevados a cabo por otras instituciones multilaterales.**¹⁵⁸

PROGRESO MÍNIMO CON RESPECTO A LOS USD 100 000 MILLONES

El financiamiento climático de los países desarrollados hacia los países en desarrollo aumenta cada vez más año a año, pero no lo suficiente. Los países desarrollados incumplen sistemáticamente el objetivo 2020 de brindar USD 100 000 millones por año en financiamiento para los países en desarrollo. **Las últimas figuras de la OCDE revelan que este financiamiento para los países en desarrollo aumentó, del 2019 al 2020, un 4% por un monto total de USD 83 300 millones, es decir que no alcanzó el monto de USD 100 000 millones anual al que**

¹⁵⁶ Nexo de Acción Feminista para la Justicia Económica y Climática, [Un informe sobre un Green New Deal Feminista y Descolonizado](#), 2021.

¹⁵⁵ ODI & Heinrich Böll Stiftung (HBS), [Gender and Climate Finance](#), 2022.

¹⁵⁸ Oxfam, [Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing The Delivery Of The US\\$100 Billion Commitment](#), 2023.

se comprometieron. Las partes extendieron el objetivo anual de USD 100 000 millones hasta el 2025, año en el que se establecerá el nuevo objetivo, a pesar de que la OCDE predice que el primer año que se cumplirá con el objetivo será en 2023.¹⁵⁹

Incluso si la promesa de USD 100 000 millones se cumpliera, representa sólo una fracción de lo que los países en desarrollo necesitan de financiamiento climático. **En un cómputo que se llevó a cabo en el 2021 sobre las necesidades financieras de 153 países en desarrollo que se incluían en sus planes climáticos nacionales, el monto que se requiere para financiar las agendas climáticas supera los USD 5,8 billones para antes del 2030.**¹⁶⁰ Este cómputo demuestra la necesidad de reevaluar el objetivo numérico conforme a las necesidades emergentes, en lugar de que sienten sus bases en la política, es decir, demuestra la necesidad de que aumente drásticamente.¹⁶¹ Los parámetros de cantidad y de calidad del objetivo subsecuente al objetivo 2025 (la nueva meta colectiva cuantificada, o NCQG según sus siglas en inglés) actualmente se establecen en las negociaciones climáticas de la ONU, a través de un proceso de diálogo que la sociedad civil feminista sigue activamente.¹⁶²

El financiamiento climático, por lo general, no es un financiamiento «nuevo y adicional» a los compromisos ya asumidos por los países para brindar AOD, sino que esto hace que los países desarrollados lleven a cabo una doble contabilización de sus compromisos financieros globales. **Se estima que hasta un tercio del financiamiento de desarrollo relacionado con el clima se contabiliza como parte de los compromisos existentes de AOD por parte de los países, a pesar de un acuerdo clave en donde se estipula que el financiamiento climático no debe considerarse como parte de los costos para lograr los ODS.**¹⁶³

DESAGREGACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

La composición del financiamiento climático es tan importante como la cantidad. La mayoría del financiamiento climático que recibieron a lo largo de la historia los países en desarrollo están sujetos a préstamos, lo cual es alarmante dada la obligación de brindar financiamiento climático y debido al contexto de una crisis de la deuda al alza en el sur global. **Los préstamos representan un porcentaje alarmante del 70% del financiamiento climático público que se les brindó a los países en desarrollo en el 2020, del cual la mayor parte fueron en condiciones no concesionarias (según las tasas de mercado).**¹⁶⁴ Los costos de pagar los préstamos generan la posibilidad de causar un endeudamiento insostenible para los países que reciben financiamiento climático, lo cual disminuye su espacio fiscal y su poder adquisitivo. Esta situación, en general, limita las capacidades de los países en desarrollo de construir resiliencia climática y den invertir en desarrollo sostenible.¹⁶⁵

¹⁵⁹ OECD, [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020 Insights from disaggregated analysis](#), 2022.

¹⁶⁰ Este es el monto total necesario según el cómputo realizado que abarca desde el 2021 al 2030, no el monto anual.

¹⁵⁹ Oxfam, [Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing The Delivery Of The US\\$100 Billion Commitment](#), 2023.

¹⁶² Eurodad, [Efficient, Equitable and Effective High-Quality Climate Finance: Recommendations for the post-2025 global climate finance goal](#), 2022.

¹⁶³ Oxfam, [Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing The Delivery Of The US\\$100 Billion Commitment](#), 2023.

¹⁶⁴ OECD, [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020: Insights from disaggregated analysis](#), 2022.

¹⁶⁵ Eurodad, [Efficient, Equitable and Effective High-Quality Climate Finance: Recommendations for the post-2025 global climate finance goal](#), 2022.

EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PÚBLICO HA AUMENTADO AÑO A AÑO PERO SE EMITEMAYORMENTE EN FORMA DE PRÉSTAMOS

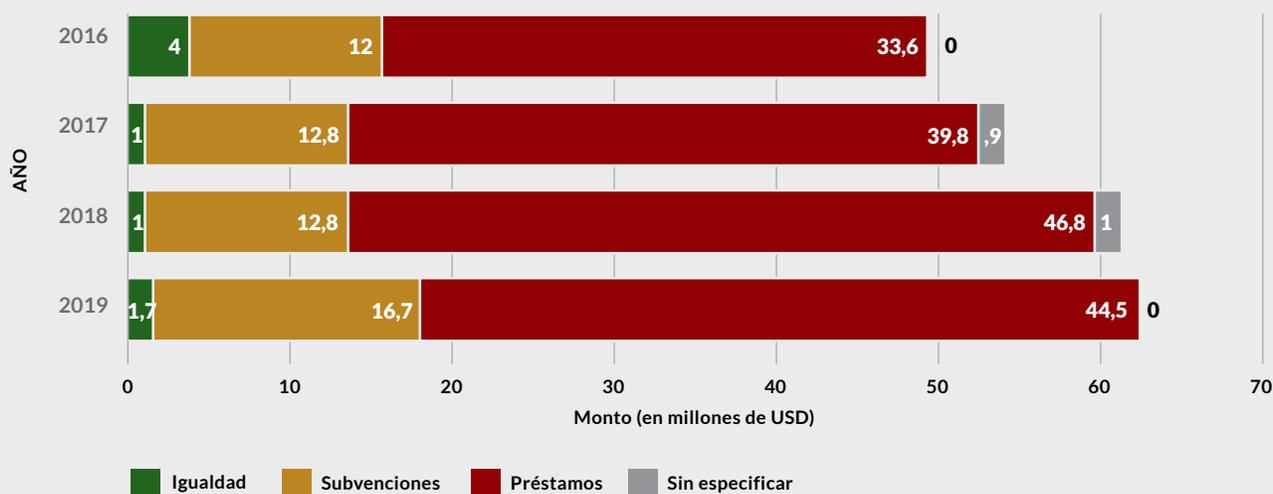


Figura 7.1: Financiamiento climático público por instrumento, con excepción de los créditos a la exportación, desde el 2016 al 2019 (Eurodad, 2021).¹⁶⁶

Si bien el financiamiento basado en subvenciones constituye una gran parte del financiamiento climático de los SIDS y los PMA, **más de la mitad del financiamiento climático de los PMA y más de un tercio del financiamiento de los PEID desde el 2016 al 2020 se concedieron en forma de préstamos. El valor neto del financiamiento climático para países en desarrollo quizás suma un monto de menos del 50% de lo que los países desarrollados han informado a la OCDE, una vez que se contabilizan los valores equivalentes a las subvenciones.**

Los PMA y los PEID son excepcionalmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Sufren de una tendencia de falta de capacidad de adaptación, de niveles de pobreza más altos y de mayores riesgos debido a su ubicación geográfica.¹⁶⁷ **Sin embargo, desde el 2016 al 2020, los PEID recibieron sólo un 2% del total del financiamiento climático, mientras que los PMA recibieron sólo el 17%.** La mayoría del financiamiento climático movilizado para los países en desarrollo se destinó a países de medianos ingresos, alegando que los países de bajos ingresos no tenían la facultad necesaria para desarrollar proyectos de financiación climática ni la capacidad de acceso y administración de fondos internacionales.¹⁶⁸

Conforme al Acuerdo de París, los países en desarrollo deberían recibir un «balance del financiamiento de adaptación y el de mitigación», pero el financiamiento climático ha migrado de manera desproporcionada hacia la mitigación. **Más de la mitad (58%) del financiamiento climático para los países en desarrollo se destinó para la mitigación, especialmente en países con altas emisiones y hacia sectores de energía y transporte.** En parte, esto se debe a la asociación entre mitigación y actividades que generan rentabilidad financiera explícita, lo que lo convierte en un ámbito de inversión más atractivo.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Eurodad, [New figures on climate finance: The good, the bad, the disturbing and what's missing](#), 2021.

¹⁶⁷ Oxfam, [Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing The Delivery Of The US\\$100 Billion Commitment](#), 2023.

¹⁶⁸ OECD, [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020: Insights from disaggregated analysis](#), 2022.

¹⁶⁹ Oxfam, [Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing The Delivery Of The US\\$100 Billion Commitment](#), 2023.

El financiamiento de adaptación está aumentando, pero todavía existe una gran brecha. **En comparación con el monto total de USD 48 600 millones (58% del financiamiento climático público) destinado a mitigación en el 2020, sólo el 28,6% del financiamiento climático público en el mismo año fue destinado a la adaptación.** Sin embargo, entre el 2016 y el 2020, la adaptación creció más que la mitigación y que el financiamiento climático transversal a todas las áreas, tanto en términos absolutos como relativos. **La financiación para la adaptación en 2016 fue de USD 10 100 millones (17%), y para el 2020 creció a USD 28 600 millones (34%).**¹⁷⁰

FOCO DE ACTIVISMO DE ALCANCE GLOBAL

Financiamiento de pérdidas y Daños

Hasta hace poco tiempo, en el discurso dominante del financiamiento climático para la adaptación y la mitigación se ignoró deliberadamente la necesidad de abordar las pérdidas y los daños, es decir, los impactos adversos del cambio climático a los que los países no pueden adaptarse. **Se estima que solo en la región de África Subsahariana, los países prácticamente tendrán que tomar una deuda de USD 1 billón, es decir, un 50% de aumento sobre los niveles de deuda actuales en proporción al PBI, en caso de ausencia de financiamiento adecuado para pérdidas y daños.**¹⁷¹

En la COP26, las partes del sur global demandaron que se establezca un Mecanismo de Financiamiento de Pérdidas y Daños. Los países con las economías más grandes, liderados por EE. UU., se opusieron rotundamente a las recomendaciones.¹⁷² Durante el primer día de la COP28, el mecanismo de pérdidas y daños finalmente fue acordado, sin embargo, sigue sin ser suficiente para cubrir las necesidades de los países climáticamente vulnerables.¹⁷³ Dado que los países del sur enfrentan un estimado de USD 400 000 millones anuales en pérdidas irreversibles a causa del cambio climático, la promesa de los países del norte global de USD 700 millones cubre menos del 0,2% de lo que se necesita. Algunos países, inclusive el Reino Unido, se han comprometido con montos que parecen no ser ni nuevos ni adicionales a los compromisos financieros climáticos existentes.¹⁷⁴ El fondo estará ubicado en el Banco Mundial durante cuatro años, propuesta a la que los países del sur global y la sociedad civil se resistieron, a pesar de que supuestamente se crearon barreras para garantizar la independencia del mecanismo con respecto a los intereses del Banco Mundial.¹⁷⁵



En general, mientras las estimaciones anuales de financiamiento climático pueden estar más cerca de los USD 100 000 millones anuales que en años anteriores, los países desarrollados no cumplieron con este compromiso. Esto ocurre a pesar de que los países desarrollados dependen de estándares contables generosos y que desembolsan una cantidad desmedida de préstamos con respecto a subvenciones. Para abordar de forma favorable la escalada de la crisis climática, es necesario ir más allá del objetivo de USD 100 000 millones anuales, en este sentido, resulta necesario garantizar la adaptación liderada por las comunidades locales, garantizar los flujos de financiación, y expandir el foco de adaptación y mitigación para también abarcar pérdidas y daños.

¹⁷⁰ OECD, [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020: Insights from disaggregated analysis](#), 2022.

¹⁷¹ CAN International & Debt Justice, [The debt and climate crises: Why climate justice must include debt justice](#), 2022.

¹⁷² Third World Network, [Loss and Damage Fight at COP26](#), 2021.

¹⁷³ UNFCCC, [Establishing a dedicated fund for loss and damage: Key takeaways from COP27](#), 2022.

¹⁷⁴ The Guardian, [\\$700m pledged to loss and damage fund at Cop28 covers less than 0.2% needed](#), 2023.

¹⁷⁵ Reuters, [World Bank poised to host climate loss and damage fund, despite concerns, 2023](#).

CONCLUSIÓN

Hay una gran distancia entre el estado actual de nuestro planeta y la visión feminista para la justicia económica y climática que se describe en el marco conceptual del Nexo de Acción. Los sectores más ricos del mundo continúan siendo responsables por la mayoría de las emisiones históricas y futuras a nivel mundial, mucho más de lo requerido para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París del 1.5 °C. A su vez, la población multimillonaria del sector de los combustibles fósiles alcanza nuevos récords en sus ingresos y riquezas. De manera similar, se proyecta que las empresas de combustibles fósiles aumenten la litigación en contra de los países cuyas regulaciones ambientales tengan impacto sobre los más precarizados, ya sea para facilitar el congelamiento normativo o para generar pagos para sus activos varados. Cada vez es más recurrente que inviten a las empresas a participar en la toma de decisiones internacionales sobre los problemas de alcance global, lo que infringe el espacio democrático de toma de decisiones de la ONU. Por fuera de la ONU, el FMI y el Banco Mundial siguen sosteniendo un rol predominante sobre los asuntos de financiamiento y desarrollo, que junto con la captura corporativa de la gobernanza económica mundial agravan los déficits democráticos en la toma de decisiones internacional sobre asuntos económicos.

Mientras tanto, los países del sur global no reciben el financiamiento climático y para el desarrollo que necesitan a fin de abordar las causas y consecuencias de la policrisis. En lugar de recibir un adecuado financiamiento climático basado en subvenciones, los países del sur global son atacados por una montaña infinita de crisis de la deuda que se ve exacerbada por el financiamiento climático que se desembolsa, de forma desproporcionada, en préstamos. De hecho, muchos países están destinando más al pago de la deuda de lo que reciben en financiamiento climático. Producto de que los países están encerrados en un círculo vicioso del servicio de la deuda, los países tienen un espacio fiscal limitado para invertir en el gasto social necesario para cumplir con los ODS y lograr la igualdad de género. En definitiva, esto los forzará a tomar préstamos más grandes, por lo general de instituciones como el FMI, que atañen condicionalidades que profundizan las medidas austeras. Los ingresos tributarios que podrían haber ganado a través de ingresos progresivos e impuestos corporativos se pierden por el abuso fiscal transfronterizo que las EMN y las personas con mayor solvencia económica llevan a cabo. En cambio, los países del sur global recurren a los impuestos regresivos al consumo que cargan excesivamente a las personas con menores ingresos, quienes son mujeres en su gran mayoría.

Las personas feministas reconocen que estas tendencias aumentan la urgencia de la acción colectiva para impulsar transformaciones económicas audaces y estructurales, y al mismo tiempo incita y reúne nuevas conversaciones sobre reparaciones, decrecimiento, y cancelación de la deuda. Las protestas en contra de la policrisis están resonando a lo largo del sur global. La sociedad civil activista y los países del sur global han estado a la cabeza del liderazgo para reclamar por una Convención Marco de las Naciones Unidas para la Tributación, un mecanismo de resolución de la deuda de la ONU, y el financiamiento de pérdidas y daños para los países climáticamente vulnerables. En algunos casos, como se puede observar en las propuestas del Secretario General de la ONU sobre la reforma de la gobernanza fiscal internacional y lograr establecer un mecanismo de financiamiento de pérdidas y daños en la COP27, finalmente estas demandas están empezando a estar poco a poco en el centro de atención. Estas victorias son necesarias, pero no suficientes. El colectivo feminista continúa avanzando con una visión de justicia económica y climática que quizás un día logre cerrar la brecha entre lo que somos y lo que necesitamos ser.